

150
SUSPENSIONES DE PAGOS, QUIEBRAS
Y TRIBUNALES DE COMERCIO

Memoria

ESCRITA POR

Angel M.^a Camacho y Perea

ABOGADO DEL ILUSTRE COLEGIO DE SEVILLA

SOBRE EL TEMA PROPUESTO

POR EL

Excmo. Ayuntamiento Constitucional de Málaga

Y PREMIADA EN EL CERTAMEN CELEBRADO

POR EL

COLEGIO PERICIAL MERCANTIL

DE LA REFERIDA CIUDAD DE MÁLAGA

EN EL AÑO DE 1900

SEVILLA

Tipografía de Gironés, Lagar 5.

1901

SUSPENSIONES DE PAGOS, QUIEBRAS
Y TRIBUNALES DE COMERCIO

Memoria

ESCRITA POR

Angel M.^a Camacho y Perea

ABOGADO DEL ILUSTRE COLEGIO DE SEVILLA

SOBRE EL TEMA PROPUESTO

POR EL

Excmo. Ayuntamiento Constitucional de Málaga

Y PREMIADA EN EL CERTAMEN CELEBRADO

POR EL

COLEGIO PERICIAL MERCANTIL

DE LA REFERIDA CIUDAD DE MÁLAGA

EN EL AÑO DE 1900

SEVILLA

Tipografía de Gironés, Lagar 5.

1901





TEMA

Reformas que pueden introducirse en la Legislación Mercantil vigente en cuanto se relaciona con suspensiones de pagos y quiebras, y conveniencia del restablecimiento de los Tribunales de Comercio.

ENTRE todas las cuestiones que han surgido con motivo del estudio de la Legislación Mercantil, las más importantes y trascendentales son aquellas que se comprenden en el tema que nos proponemos desarrollar. Por eso, sin duda, son también las más discutidas entre comerciantes y jurisconsultos, y por eso, con notable acierto, se abre amplio palenque en este Certamen sobre aquellos puntos, no vacilando nosotros en traer al debate, ya que no fecundas ideas, que nuestra limitada inteligencia no nos permite exponer con la lucidez que deseamos, al menos pensamientos propios, frutos de un profundo estudio y de una dilatada práctica.

Los múltiples intereses afectados por las suspensiones de pagos y las quiebras; las deficiencias que se notan en nuestra legislación; los gravísimos peligros que los defectos legales originan, y la necesidad imprescindible de acudir al remedio de los inapreciables males que ocasiona el abuso del crédito, son motivos poderosísimos é indiscutibles que aconsejan tratar esas materias con el debido detenimiento, aportando cada cual, en la medida de sus fuerzas, el caudal de sus conocimientos y el resultado de su experiencia, para que el legislador pueda mañana aprovechar lo que sea verdaderamente útil y acometer la reforma de las leyes con las mayores probabilidades de acierto.

En orden á los Tribunales de Comercio, no se trata de una cuestión de amor propio mercantil, sino de un asunto de verdadera transcendencia; porque de nada serviría un Código inspirado en los más sanos principios del Derecho y una Legislación acertada, tanto en lo substantivo como en lo

objetivo, si, por defecto de organización de los Tribunales que habían de aplicar esas leyes, ó por desconocimiento de las prácticas mercantiles en los jueces encargados de dirimir las contiendas, se desnaturalizaban los buenos propósitos del legislador y se dictaban sentencias injustas ó contrarias á los intereses comerciales.

Convencidos de la importancia y oportunidad del tema, hemos de estudiarlo con el mayor esmero, y, procurando ordenar nuestro trabajo, analizaremos con separación cada uno de los tres puntos que abarca.

I

Suspensiones de pagos

1.º Consideraciones generales.

El crédito es el alma del comercio; pero es tan fácil el abuso, tan grandes los riesgos que origina, y tan numerosos los intereses comprometidos en las operaciones mercantiles, que la ley no puede permanecer inactiva ante ese peligro, y tiene necesidad de otorgar eficaces medios de defensa y reparación al que ha sido lesionado en sus intereses por los desaciertos, desgracias, imprudencias ó malicia de un comerciante que no ha sabido ó no ha querido usar con prudencia de un recurso tan fértil cuando se maneja bien, como expuesto á irreparables perjuicios cuando se emplea sin habilidad ó sin buen deseo.

Previsto el caso de que un comerciante abuse del crédito, sean cualesquiera las causas que lo lleven á una situación difícil, la ley debe también facilitar los medios de resolver el conflicto si se trata de involuntarias desgracias, ó castigar al delincuente si se han realizado actos dolosos; evitando en ambos casos que el mal producido trascienda á personas relacionadas con aquel comerciante, pero sin intervención directa en sus actos mercantiles; y si eso no fuera posible, como en realidad no lo es en la mayoría de los casos, procurar, al menos, atenuar los deplorables efectos de esa desgracia ó de ese delito.

Delicadísima en alto grado es la cuestión referente á si debe estimarse como verdadera quiebra la situación de un comerciante que no puede aten-

der con la debida regularidad á los compromisos contraídos ni á las obligaciones que se impuso; ó si, por el contrario, debe admitirse un estado intermedio, que, sin producir todos los efectos legales de la quiebra, facilite el modo de resolver una situación transitoria y difícil, pero no definitiva y desesperada.

Estudiada y debatida prolijamente esa cuestión por los comerciantes y jurisconsultos nacionales y extranjeros, se ofrecen tres distintos criterios, que debemos analizar para decidirnos por el que parezca más acertado, como base de los preceptos que han de encarnar la legislación en esta materia.

1.º *Sistema francés*.—La quiebra debe declararse desde el momento en que un comerciante deja de atender á sus obligaciones, bien sea temporal ó definitivamente; ya posea bienes suficientes para cubrir todas sus deudas, ó ya cuente sólo con un activo insuficiente para cubrir su pasivo.

2.º *Sistema italiano*.—La quiebra sólo es procedente cuando el activo no cubre el pasivo, sin dar aquél carácter á la simple suspensión de pagos.

3.º *Sistema belga*.—Se admite un estado provisional y distinto de la verdadera quiebra, pero que participa de algunos de los efectos de ella, cuando el comerciante suspende pagos.

Examinados esos tres distintos sistemas, y comparados entre sí, no ofrece dudas de que el último tiene ventajas, tanto para el comerciante como para sus acreedores, y el legislador debe tenerlas en cuenta para aprovecharse de ellas.

La quiebra es una medida radical que produce perturbaciones en el comercio y origina gravísimos é irreparables perjuicios. Cortando de un solo golpe la vida normal del comerciante, paraliza todos sus negocios, impide la continuación de sus relaciones mercantiles y viene á constituir una liquidación anticipada y extemporánea de todas sus operaciones. Si á esto se agregan los gastos que ocasiona, el tiempo que se pierde y el quebranto que seguramente han de tener, en mayor ó menor escala, los intereses de los acreedores, se comprenderá ya que, antes de llegar á ese recurso extremo, conviene apurar todos los medios de arreglo, á semejanza de lo que ocurre en los negocios civiles, donde el legislador ha querido, con acertada prudencia, que, antes de promover cualquier litigio, salvo raras excepciones, se intenten los medios amistosos.

La suspensión de pagos viene á ser, pues, un acto conciliatorio que no es forzoso como en lo civil, sino voluntario, antes de acudir al juicio universal de quiebra; y si en la tramitación de ese expediente no se fijan las mismas reglas establecidas para los asuntos judiciales sometidos al derecho común, es porque en las suspensiones de pago no se trata, como en aquellos juicios, de una contienda entre dos partes; sino que aquí, de un lado se encuentra el deudor común, y de otro varios acreedores, siendo imprescindible, si no están todos ellos en completo acuerdo, que se sometan á la decisión de la mayoría.

2.º Legislación antigua.

Nuestro primer Código de Comercio de 1829, inspirándose en el criterio más restrictivo, admitía sólo la quiebra sin estado alguno intermedio; pero conocidas las ventajas del procedimiento titulado de “quita y espera,” entre los no comerciantes, surgió la idea de adoptar un recurso análogo en los asuntos mercantiles. De ahí procede que, al reformarse el Código en 1885, se dedicase una sección especial á la suspensión de pagos, que antes sólo era una de las distintas clases de quiebra, y sujeta, por lo tanto, á las reglas de aquel juicio, mientras que ahora se fija un procedimiento distinto.

Esta innovación fué recibida con aplauso por la opinión general de comerciantes y juristas; pero no tardó mucho tiempo en sobrevenir el desencanto y la desilusión, cuando, aquilatada la reforma en el crisol de la experiencia, se descubrieron defectos que en un principio no se habían notado.

Es una ley constante de la humanidad, inalterable como todas ellas, que el mal vaya siempre unido al bien, sin que sea posible separarlos completamente; y se comprende que así sea, pues de lo contrario realizaríamos en esta limitada esfera donde nos desenvolvemos el bien absoluto, que está reservado como atributo de la Divinidad. No hay institución humana, por perfecta que parezca, que, al lado de sus notorias ventajas, deje de ofrecer graves é irremediables males; no hay ley alguna que, aun cuando se dicte para realizar un progreso ó subvenir á una necesidad, deje de presentar en la práctica notables deficiencias, dando lugar á grandes abusos y censurables injusticias.

En corroboración de la exactitud de ese principio, recordaremos que la reforma introducida en el Código sobre las suspensiones de pagos, fué aplaudida porque obedecía á una verdadera necesidad y llenaba un vacío que todos notábamos en la Legislación Mercantil, donde, por seguir un criterio demasiado estrecho, se imposibilitaban los medios de concordia entre los acreedores y el deudor para impedir el estado de quiebra, cuyos efectos no podían ser más perniciosos. Se creía, pues, haber realizado un bien; pero á poco se notaron las deficiencias, porque los negociantes de mala fé comenzaron á abusar de las facultades que se concedían, y todos pudimos convencernos de que se había abierto ancha puerta para que la malicia, con las innumerables armas de que siempre dispone, falseara el precepto legal, llegando el abuso á un extremo verdaderamente escandaloso.

El principal defecto de la ley consistía en facilitar el medio de adquirir un salvoconducto para proceder con todo desembarazo, sin temor á embargos ni reclamaciones judiciales de los acreedores, llegando después á obtener un convenio, tan amplio y favorable como se quisiera, sin otra limitación que la voluntad del deudor.

Cuatro renglones dirigidos al Juez bastaban para obtener en el acto la declaración de suspensión de pagos, y desde ese momento ya el deudor estaba

tranquilo, porque se paralizaban las actuaciones judiciales pendientes, se impedía que se promovieran otras nuevas y cesaba la obligación de pagar las deudas, conservando íntegro el derecho de cobrar todos los créditos. ¡Cómoda situación! ¡Cobrar y no pagar! ¡El bello ideal de todo el que no ajusta su conducta á los inmutables principios de la justicia y la moral!

Tranquilo ya el deudor, y seguro de que ninguno de sus acreedores había de molestarlo con impertinentes reclamaciones, podía dedicarse á preparar la solución definitiva, con tiempo sobrado para ello y sin apremios de ningún género, porque son inagotables los recursos que la mala fé ha encontrado en la práctica para prolongar indefinidamente esa situación anómala; y cuando el deudor había logrado atraerse á algunos acreedores débiles ó timoratos, que se unieran á los amigos incondicionales que había presentado, ostentando simulados créditos, la junta se celebraba y la proposición de convenio era aceptada por una gran mayoría, con todas las condiciones, siempre ventajosas para él, que había osado formular.

Después de la junta, bastaba al deudor adquirir por segunda mano algunos créditos y entenderse particularmente con los más díscolos, para verse libre de deudas, en posesión de un crecido capital y en aptitud de seguir dedicado á sus negocios, sin mengua de su crédito ni de su buen nombre; antes bien, con una reputación de hábil y un convencimiento de la solidez de su fortuna, que contribuían á abrirle camino para fáciles y productivas negociaciones.

No se crea que exageramos. Si no fuera por temor de ser molestos, nos detendríamos en señalar la multitud de medios que en la práctica hemos tenido ocasión de estudiar, y sólo así se tendría una idea aproximada de la inagotable fecundidad del mal en esta materia, porque el terreno era abonado para recibir la semilla, que nunca falta al que hace caso omiso de los principios de moral.

Sólo indicaremos, por vía de ejemplo, el más corriente de ellos. Decretada la suspensión de pagos, se mandaba citar á los acreedores para una junta, señalada á largo plazo, que quedaba al arbitrio judicial, por falta de prescripciones legales sobre la tramitación de estos asuntos. Llegado el día que se fijó, se decía que no habían sido citados todos los acreedores, para lo cual bastaba con ocultar algún exhorto de los que era preciso librar para la citación de los que residían fuera del lugar donde el juicio se tramitaba, y esto era motivo suficiente para suspender la junta, que no se convocaba nuevamente hasta que al deudor le convenía solicitarlo, sin perjuicio de reservarse el medio de suspenderla cuantas veces estimara oportuno.

Así se comprende que un expediente que debe seguirse con la mayor rapidez, tanto por la conveniencia de todos los interesados como por la sencillez del procedimiento que requiere, se prolongase en muchos casos, hasta el punto de que las estadísticas oficiales nos enseñan que en 1895 terminó un juicio sobre suspensión de pagos, que tardó más de cinco años en subsanciarse; en 1897 concluyó otro, que duró más de cuatro, siendo muchos los que fluctúan entre dos y cuatro años. Por nuestra parte, podemos citar un caso, que aún está pendiente, en el que se ha convocado la junta por tres veces, sin llegar á reunirse los acreedores por repetidas suspensiones;

y hoy, después de siete años que han transcurrido desde que el deudor suspendió sus pagos, continúa en el disfrute de sus bienes, cobrando y no pagando, hasta que se canse de burlar á los que en él depositaron su confianza.

Se dirá, quizá, que si esto ocurre es porque ningún acreedor reclama y exige la terminación de ese estado provisional. Así parece; pero, si bien es cierto que por la religión sabemos que contra siete vicios hay siete virtudes, la experiencia nos enseña que contra cada virtud hay más de setecientos vicios; y así hemos tenido ocasión de ver que los esfuerzos de un acreedor impaciente han servido sólo para facilitar el plan del deudor, hasta el extremo de que en algunas ocasiones nos ha parecido vislumbrar que caminaban uno y otro de acuerdo para entorpecer y dilatar las actuaciones, dando visos de verosimilitud á esa sospecha la consideración de que, cualquier incidente promovido por el acreedor, era un nuevo motivo para la suspensión de la junta, y que, substanciado el incidente por todos sus trámites, se dictaba sentencia, que era apelada, prolongándose fácilmente la segunda instancia por tiempo indefinido.

Si á ello se agrega que no siempre un acreedor está dispuesto á gastar sumas considerables en litigios para defender intereses que ya considera como perdidos, se explicará que casi siempre se deje al deudor en completa libertad, á no ser que razones de amor propio, ó extraordinarios motivos, originen esas incidencias, ineficaces en la generalidad de los casos; pues si terminan en contra del deudor, consumen todo su caudal aparente, proporcionándole una disculpa, por esas impaciencias, para no pagar sus deudas; y si se resuelven contra el acreedor, tiene éste que añadir, á la pérdida de su crédito, la suma, nunca despreciable, que haya invertido en las costas del juicio.

Al llegar á este punto debemos hacer mención, en prueba de la sinceridad con que siempre procedemos, del medio empleado por alguien para impedir que sus deudores le burlen. Ese medio es tan sencillo como eficaz. Se reduce á formular oposición en todos los casos, perseguir siempre al deudor, solicitar la declaración de quiebra y arruinarlo por completo.

Medida tan radical y costosa sólo podía utilizarla una acaudalada Empresa, que, por tener relaciones con casi todos los comerciantes, necesite imponerse por la fuerza, sin reparar en que los gastos que ocasione excedan en mucho del importe de sus créditos, ni atender al resultado del litigio, siempre que entorpezca la acción del deudor, porque, sacrificando algunas sumas en varios negocios, se adquiere fama de adversario temible; y, contando con esa fuerza moral, ya cuidarán los nuevos suspensos, escarmentados en cabeza ajena, de apartar ese acreedor, para entenderse fácilmente con los que no puedan esgrimir tan poderosas armas.

Este plan de defensa fué ideado y puesto en práctica, primeramente por una poderosa entidad mercantil, con resultados tan favorables para sus intereses, que se tenía como indiscutible en todas las suspensiones de pagos la necesidad de pagar íntegramente, y sin aplazamiento alguno, las deudas á favor de aquel acreedor que venía á constituirse como privilegiado prácticamente. Después no ha faltado alguna otra casa, dedicada á comercio

por mayor, que, copiando el mismo procedimiento, lo utilice en una región determinada, adquiriendo igual prestigio é idéntica seguridad de que sus créditos habían de ser atendidos con toda preferencia.

Indiscutible es, bajo el aspecto legal, la procedencia de esos recursos, que hasta moralmente parece que están libres de toda censura. Se trata sólo de un medio de defensa contra deudores de mala fé, y se aspira nada más que al cobro total de los créditos, lo cual es á todas luces justo y equitativo; pero, si ahondamos un poco y analizamos el procedimiento con rigurosa imparcialidad, comprenderemos que si ese acreedor ha cobrado la totalidad de su crédito, ha sido violentando al deudor y en perjuicio de los demás acreedores; ó, lo que es lo mismo, ejerciendo una coacción, que siempre es ilegítima, para adquirir una especie de privilegio, que por ningún título le corresponde.

Todos los acreedores se encuentran en igualdad de circunstancias; justo sería que todos ellos cobrasen íntegramente; pero si, á consecuencia de la desgracia ó la malicia de un deudor, el activo no es suficiente para cubrir el pasivo, los acreedores deben sufrir á prorrata el perjuicio; y si alguno de ellos consigue eludir esa pérdida, haciéndola recaer sobre los demás, que verían sus créditos sometidos á una nueva reducción en todo aquello que alguno cobrara sobre lo que le correspondiera en justicia, se habrá utilizado un recurso legal, pero realizando un acto que, en estricta moral, no puede defenderse, y que repugna y molesta á la generalidad, como todo lo que significa injustos privilegios y desigualdades notorias.

Sirvan estas indicaciones como demostración de la ineficacia de toda clase de recursos para combatir la obra de la mala fé y como prueba del riesgo que se corre, aun concretándose aparentemente á la estricta defensa de los propios intereses, de ejecutar acciones censurables, que se asemejan á lo que, en el *argot* truhanesco, se llama “cobrar el barato.”

Hemos demostrado hasta aquí que, tan fáciles y eficaces como son los medios con que cuenta un deudor malicioso para perjudicar á sus acreedores, tan difíciles, inútiles y expuestos son los recursos defensivos que utiliza el acreedor, en cuanto á los incidentes judiciales que puede promover en esta clase de juicios; y si ahora estudiamos la solución definitiva del asunto, veremos que es omnímoda la voluntad del deudor, porque puede alcanzar cuanto desee en el convenio que, seguramente, habrá de aprobarse en la junta. Por vía de ejemplo nos bastará decir que conocemos un caso, entre otros muchos notables, en que se convino, por gran mayoría de acreedores reunidos en junta, que el deudor quedara libre de todas sus deudas, pagando un 5 por 100 en tres años. ¿Puede calificarse esa proposición de pago parcial, ó merece mejor el nombre de burla sangrienta? Pues si aun esa burla tienen que soportar los acreedores, ¿qué limite puede tener la voluntad del deudor?

Las repetidas lecciones de la experiencia nos han hecho adquirir el convencimiento de que el mal tenía tan hondas raíces, que era inútil luchar contra él; y así es que, más de una vez, hemos sostenido que la desmoralización de nuestra sociedad no es tan grande como se supone, y sobre todo, que la buena fé en el comercio es mayor de lo que generalmente se cree, cuando no se han visto á cientos y á millares las suspensiones de pagos.

Dada la fiebre actual de los negocios y la ruinosa competencia entre los fabricantes y almacenistas, que, animados del deseo de dar salida á sus productos, desatienden las más elementales reglas de cordura, basta un pequeño capital, buenas referencias y exactitud en el pago de los vencimientos durante un plazo no muy largo, para que el comerciante encuentre quienes abarroten de géneros su casa, dándoles plazos y facilidades para el pago. Si ese comerciante es de mala fé, en poco tiempo puede realizar una buena fortuna, presentándose en suspensión de pagos, y una vez obtenido el convenio con los acreedores, puede seguir sus negocios, si bien no con su conciencia tranquila, salvando al menos las mallas del Código penal.

Mentira parece que haya aún quienes realicen hurtos, robos y estafas, expuestos á morir en un presidio, cuando tienen medios de apropiarse los capitales ajenos sin temor á que la Guardia civil los persiga, ni la policía los detenga, ni los tribunales los condenen. Aun la repulsa de las personas honradas, único castigo que no pueden evitar, tiene que ser reservada y secreta, porque si llega de algún modo á exteriorizarse, la ley protege todavía al hábil comerciante, concediéndole derecho para perseguir, como autor de los delitos de injuria ó de calumnia, al que se permita decir que no ha cumplido sus obligaciones.

3.º Legislación actual.

Si bien toda la gravedad del mal sólo era conocida de los que, por razón de sus cargos ó la extensión de sus asuntos, tenían que intervenir en muchos negocios de esta índole, eran tan notorios los abusos, y tan repetidos los fraudes, que la opinión pública se formó rápidamente, exigiendo la pronta y radical reforma del Código de Comercio sobre este punto. Artículos periodísticos, discursos en Ateneos y reuniones, solicitudes de Cámaras de Comercio y exposiciones de Sociedades mercantiles, prepararon la presentación á las Cortes de un proyecto de ley; y sin embargo, todavía pasaron algunas legislaturas sin aprobarse, hasta que, al fin, en 10 de Junio de 1897, se publicó la reforma del Código, que es hoy ley en materia de suspensiones de pagos.

Esa reforma se reduce, en esencia, á limitar la facultad de presentarse en suspensión de pagos, exigiendo que el suspenso presente un balance donde el activo sea suficiente á cubrir el pasivo, cuando antes tenía el mismo derecho, aun en el caso de que no hubiera bienes suficientes para cubrir las deudas. Al mismo tiempo se exige que acompañe á su escrito la proposición que haga á los acreedores, y prohíbe que se admita toda solicitud de quita, reduciendo la espera al plazo máximo de tres años.

¿Bastan esos preceptos para cortar todo abuso y purgar al Código de los defectos que antes se notaban? Eso es lo que vamos á estudiar seguidamente; pero, aunque sea anticipando juicios, hemos de consignar que, si bien

puede asegurarse que la intención de los que han perseguido esa reforma es la mejor, y que merecen el agradecimiento de las clases mercantiles los que han trabajado durante muchos años, hasta conseguir, á costa de no pocos esfuerzos, la promulgación de esa ley, se ha equivocado, en nuestro concepto, el camino, y los males que antes deplorábamos han de continuar sin enmienda alguna.

Parece que el principal objeto que se persigue por la ley que analizamos es el de disminuir los casos en que pueda utilizarse el recurso de la suspensión de pagos, y deseosos de aportar datos oficiales para averiguar si se había conseguido ese propósito, hemos consultado las estadísticas de la Administración de Justicia en lo civil; pero como la última que conocemos es la de 1897, y la ley que nos ocupa tiene fecha de 10 de Junio de ese mismo año, no podíamos apreciar debidamente sus efectos más que en un semestre. Por lo que pueda servir, diremos que en el indicado año de 1897 se terminaron 52 suspensiones de pagos, mientras que en el año 1891 se subsanaron 72, llegando á 94 en el de 1894 y descendiendo á 79 en el de 1895 (1).

Concediendo, si se quiere, que los negocios judiciales sobre esta materia han disminuído como consecuencia de la nueva ley, todavía nos falta discutir si ese fin era el que debió procurarse, no vacilando en afirmar por nuestra cuenta que no ha debido ser esa la aspiración del legislador, atendiendo al siguiente dilema: si la suspensión de pagos es un mal en sí, no debemos procurar disminuirlo, sino hacerlo desaparecer en absoluto, y con suprimir esa sección del Código, volviendo al sistema que inspiró al antiguo, la cuestión está resuelta. ¿Se cree, por el contrario, que la suspensión de pagos es esencialmente beneficiosa, y sólo se trata de corregir sus abusos? Pues entonces no debemos disminuir la facilidad de utilizarla, sino adoptar medidas de precaución suficientes á subsanar las deficiencias que la práctica haya puesto de relieve. En una palabra: si la suspensión de pagos es perjudicial, borrémosla del Código; y si es beneficiosa, sostengámosla en toda su extensión, procurando tan sólo corregir sus defectos ó poner trabas á los que tiendan á realizar abusos.

Sin necesidad de repetir los mismos razonamientos, daremos por reproducida nuestra manifestación favorable á las suspensiones de pagos; y sin duda ese criterio es el más corriente, cuando, apesar de los innumerables daños que han originado, á nadie ha ocurrido, al menos que sepamos, pedir su supresión, sino solicitar su reforma.

El abuso, por grave que sea y por mucho que se prodigue, no puede invocarse como razón para destruir lo que esencialmente es bueno, á menos de incurrir en el error del que, teniendo en su casa un hueco abierto, por el que algunos cayeron, mandó tapiarlo, suprimiendo la luz y la ventilación de las habitaciones, sin ocurrirle que era más acertado colocar una reja que impidiera las desgracias y no le privase de los beneficios que aquel hueco proporcionaba.

(1) De la estadística de 1898, que es la última publicada, con posterioridad á la redacción de esta Memoria, resulta que en ese año se terminaron 62 suspensiones de pagos; pero es de advertir que algunas de esas actuaciones se incoaron tres años antes.

Lo peor del caso es que esas restricciones y limitaciones son eficaces tan sólo cuando se trata de un comerciante de buena fé, á quien desgracias imprevistas lo llevan á ese estado; pero no tienen transcendencia alguna para corregir los abusos que deploramos, originados por los deudores fraudulentos, porque aquél no se atreverá á presentar un balance inexacto, mientras que á éste le es fácil amañar sus libros, que, después de todo, no tiene obligación de presentar, y cumple con la ley afirmando que su activo supera al pasivo, para lo cual cuidará de dar á sus bienes en el balance un valor excesivo, ó presentar como cobrables créditos ilusorios.

Lo mismo podemos decir en lo referente á la prohibición de solicitar quita, reduciendo el plazo máximo de la espera. El comerciante honrado no ha de pedir lo que sabe no ha de cumplir, mientras que al estafador le basta un plazo de tres años, ó menos si se quiere, para que haga desaparecer todos sus bienes, simule negociaciones, arregle sus libros ó se prepare para una nueva suspensión de pagos.

Después de todo, la quita y la espera son esencialmente idénticas, porque ambas significan una novación de contrato en perjuicio del acreedor; y además, siempre hemos visto propicios á los comerciantes para aceptar cualquier suma ofrecida de presente, antes que conceder plazos y prórrogas, sin aparente quebranto de sus intereses, porque en estos casos surge rápidamente la desconfianza y suele recordarse el proverbio español de que "más vale pájaro en mano que ciento volando."

Desde luego, pues, presumimos que esa reforma producirá la disminución de esa clase de expedientes, pero tan sólo en los casos motivados por verdaderas desgracias, que son precisamente los únicos que debían facilitarse; y que continuarán en igual forma, lamentándose los males que deplorábamos, y realizándose la mayoría de los abusos que antes se detallan.

El pesimismo con que nos expresamos no es gratuito y arbitrario, como algunos supondrán, sino fruto de la experiencia, pudiendo citar un caso, que actualmente pende ante los Tribunales, en el que se ha presentado en suspensión de pagos un comerciante, acompañando balances amañados, exagerando la realidad de su activo con el aumento de valor que da á los bienes que posee, después de ocultar los que ha creído más realizables, en previsión de cualquier entorpecimiento. No contento con ello, desfigura el pasivo, incluyendo acreedores que no son legítimos y suprimiendo otros que pudieran perjudicarle; confiesa que no lleva libros de contabilidad, y por último, prolonga indefinidamente la reunión de la junta, que aún no se ha mandado convocar, después de tres meses; y como ninguno de los acreedores burlados se atreve á reclamar ante el Juez, por temor á los gastos, y más aún porque el incidente que promoviera facilitaría el deseo del deudor de prolongar más tiempo las actuaciones, puede éste tranquilamente seguir sus negocios, sin atender á ningún vencimiento, y esperar á que el cansancio ó la debilidad reduzcan á sus acreedores, para conseguir de ellos cuanto desee, si es que no prefiere continuar en ese estado hasta consumir todos los bienes que indebidamente disfruta (1).

(1) Nuestros temores se han confirmado recientemente, porque el deudor á quien aludimos ha

4.º Reformas que deben introducirse en la legislación.

Señaladas las deficiencias de la ley, tenemos que apresurarnos, si nuestro trabajo ha de ser fructífero, á indicar la forma más adecuada de corregirlas, manifestando ingenuamente nuestra íntima convicción de que no hay otro medio eficaz que el de dictar atinadas reglas de procedimiento para la substanciación de esa clase de expedientes.

Es un error muy extendido el de creer que sólo tienen importancia y transcendencia las leyes substantivas, mientras que las objetivas ó de procedimiento son de un interés secundario, no merecen el mismo estudio que aquéllas, y pueden, en último caso, aplazarse ó suprimirse.

Por el contrario, es lo cierto que las leyes de procedimiento son el corolario indispensable de las substantivas; que necesitan detenido estudio y prolijo examen; que es preciso adaptarlas con acierto al criterio á que obedecen éstas, y que, sin ellas, la reforma más sabia y oportuna dejará de producir los beneficiosos resultados que fueran de esperar, ó, al menos, puede desnaturalizarse el principio que sirvió de norma al legislador.

Pudiéramos citar más de un caso en que, reglamentos mal formados, contrariaban el criterio en que se inspiró la ley á que se referían; otros en que las reglas de procedimiento entorpecían, en vez de facilitar, la aplicación de acertadas leyes substantivas; y muchos en que la falta de esos reglamentos ocasionaba dudas, cuestiones, litigios y abusos por parte de los que procedían dolosamente; pero, deseosos de no salir de los límites que se nos han trazado, nos concretaremos á presentar este caso como ejemplo del poco interés que ofrece á los legisladores todo lo que se relacione con el procedimiento, y de los transcendentales perjuicios que ese descuido origina en la práctica.

Dijimos al principio que la suspensión de pagos fué una novedad introducida en nuestras leyes al reformar en 1885 el Código de Comercio; pero faltaba dictar las reglas de procedimiento, que no podían encontrarse en la ley de enjuiciamiento civil, anterior á esa reforma. Transcurren, sin embargo, doce años sin llenar ese vacío, y los Juzgados y Tribunales han tenido que substanciar esos expedientes arbitrariamente, aplicando preceptos establecidos para otros casos más ó menos análogos, sin obedecer á un plan fijo, ni tener una norma constante que pudiera servir de base para la jurisprudencia.

Lógrase reformar el Código de Comercio en esta materia, inspirándose en el deseo plausible de corregir los vicios que hasta entonces se notaron, y el artículo 2.º de la ley de 10 de Junio de 1897 ordena al Ministro de Gracia

y Justicia que, previa audiencia de la Comisión general de Codificación, proceda á reformar la ley de enjuiciamiento civil, para ponerla en armonía con el Código de Comercio “y satisfacer las reiteradas reclamaciones del comercio honrado en cuanto se relaciona con las suspensiones de pagos y quiebras.”

Tres años han transcurrido desde entonces, y ni la reforma se ha hecho, ni tenemos noticias de que trate de hacerse, continuando como al principio, sin una ley de procedimientos, buena ó mala, que regule la tramitación de estos expedientes, confiados por completo al arbitrio judicial, abandonando á la ventura estos delicados asuntos y contribuyendo á que las iniciativas del legislador se desprestigien por falta de resultados prácticos, ó, lo que es peor, por el convencimiento de que originan mayores males que los notados anteriormente.

¿Cómo es posible que esta ley produzca beneficiosos resultados, si no se establecen frenos para impedir abusos, ni se conceden medios de defensa á los que proceden de buena fé? Cuando es notorio que la malicia encuentra fácilmente armas que esgrimir, y el litigante que quiere ajustar su conducta á los principios de justicia lucha siempre en condiciones desventajosas, aunque no sea más que porque tiene que escogitar los medios de que ha de valerse, mientras que para aquél todos son buenos si le conducen al fin apetecido; cuando nadie ignora que es más difícil la defensa legal que el ataque injusto; cuando es una verdad en todos los órdenes que el camino del mal se presenta llano, y el del bien está erizado de abrojos, ¿vamos á conceder un derecho tan expuesto á degenerar en corruptelas y abusos, sin dictar al mismo tiempo restrictivos preceptos y atinadas reglas de substanciación?

Debemos decirlo sin ambages ni rodeos. Es una verdadera imprudencia que puede calificarse de temeraria; es una falta que no merece disculpa la de autorizar las suspensiones de pagos sin apresurarse á establecer una ley de procedimientos que, inspirándose en el mismo criterio que sirvió de base á la reforma, impida los abusos que deploramos y facilite los medios de defensa á todo el que no quiera abandonar su derecho y sus intereses á merced de un estafador.

La principal cuestión que se ha suscitado sobre esta materia tiene por objeto decidir si el comerciante suspenso debe continuar en la libre disposición de sus bienes, sin intervención alguna de sus acreedores, ó si, por el contrario, una vez declarada la suspensión de pagos, procede limitar las operaciones mercantiles del suspenso, adoptando medidas de precaución para evitar que, durante el período de tiempo en que ha de sustanciarse el expediente, pueda malversar sus bienes y burlar á los legítimos acreedores.

Esta última opinión es la que sustenta la Sociedad “Fomento del Trabajo Nacional” en un notable proyecto de ley que formuló en 1891 sobre la reforma del Código de Comercio en lo referente á suspensiones de pagos y quiebras. Propone que, al decretarse la suspensión, se nombre un Interventor, que deberá ser el acreedor de mayor cantidad por derecho propio, confiriéndole facultades para intervenir y autorizar con su firma las operaciones del suspenso, inspeccionar los libros de contabilidad, comprobar el balance, investigar la exactitud de los créditos, fijar el valor exacto del activo, y faci-

litar á los demás acreedores cuantas noticias y antecedentes necesiten.

Establecida la intervención en esa forma, se cortan grandes abusos que hoy son frecuentes, y se impide que el comerciante suspenso maneje libremente sus bienes, realizando sus créditos, sin atender al pago de las deudas; pero se crea una situación difícil, se entorpecen las operaciones mercantiles y se anticipa un verdadero estado de quiebra, sin esperar al resultado de la junta, que puede ser favorable al convenio.

Sin discutir siquiera la bondad de ese proyecto y la eficacia de esa intervención, porque desde luego reconocemos que el pensamiento es acertado, tanto en principio como en la forma de desarrollarlo, nos opondremos, sin embargo, á su aceptación, porque desnaturaliza el carácter propio y peculiar de esos expedientes.

Hemos convenido en que la suspensión de pagos es un estado provisional é intermedio que obedece al deseo de evitar la declaración de quiebra con todas sus funestas y naturales consecuencias; y siendo así, no podemos equiparar al comerciante suspenso con el quebrado, coartando su libre é independiente desenvolvimiento. El comerciante quebrado confiesa la imposibilidad de continuar sus negocios mercantiles, y la quiebra es un juicio universal donde se liquidan los asuntos pendientes; pero el suspenso sólo expone las dificultades con que tropieza, que pueden ser transitorias ó circunstanciales, y busca el medio de que sus acreedores le faciliten la solución para continuar dedicado á sus negocios.

Ya hemos comparado á la suspensión de pagos con un acto conciliatorio, encaminado á buscar un convenio que haga innecesaria la quiebra; y mientras la proposición que se formule no sea desechada por los acreedores, debemos sostener al suspenso en el pleno goce de sus derechos, que sólo se interrumpen por la quiebra, con la interdicción civil, que es consecuencia de ella.

Siguiendo el mismo criterio, indicase en aquel proyecto de ley que el suspenso, después de aceptar el convenio, quedará sujeto en el manejo de sus negocios á la intervención de uno de los acreedores designados en la junta; y tanto esa intervención como la otra de que antes hablamos, son lógicas bajo el punto de vista de que la suspensión de pagos es una especie de quiebra. Si así se cree, restablézcanse los preceptos del antiguo Código de Comercio que partían de esa base; pero si se estima conveniente aceptar un estado intermedio, sin llegar á la quiebra, es preciso, para ser también lógicos, respetar al suspenso en el ejercicio de sus derechos, sin intervención ajena, hasta que no llegue el momento de reconocer su impotencia cuando se deseche la proposición de convenio que dará lugar, *ipso facto*, á la incoación del juicio de quiebra con todas sus consecuencias.

Esto no impide, antes bien, es un motivo más para que, si rechazamos la intervención, se adopten todo género de precauciones para evitar abusos, y, sobre todo, que se procure terminar el expediente en el más breve plazo posible, porque estas situaciones provisionales no pueden durar mucho, ni esos estados intermedios y transitorios pueden prolongarse, ni es conveniente, salvo para el que proceda con malicia, tener en entredicho su crédito y en suspenso el ejercicio de sus derechos.

Deseosos de señalar siquiera las bases en que debe apoyarse la reforma, y sin detenernos en aquellos principios que son comunes á toda buena ley de procedimientos que debe aspirar á la brevedad, economía y garantías de acierto, indicaremos algunos detalles que son peculiares de esta clase de asuntos; y para obedecer á un plan fijo, trataremos separadamente de todos y cada uno de los vicios que hemos notado, para poner á continuación los recursos que estimemos más adecuados para corregirlos.

1.º La principal corruptela que señalamos fué la facilidad con que el comerciante doloso podía dilatar las actuaciones, prolongando indefinidamente ese estado excepcional. Para corregir ese defecto debe establecerse lo siguiente:

A) Obligar al Juez, bajo su responsabilidad personal, á que en el mismo día de recibir el escrito donde el comerciante se presente en suspensión de pagos, mande convocar la junta de acreedores, señalando un día próximo, dentro del plazo que se fije, proporcional á la distancia á que se encuentren.

B) Ordenar que los exhortos necesarios para la citación de los acreedores que residan fuera del lugar del juicio se tramiten de oficio, con carácter preferente y bajo la responsabilidad del actuario ó del Juez en caso de extravío ó de dilaciones injustificadas (1).

C) Prohibir que, bajo pretexto alguno, se suspenda la celebración de la junta en el día señalado.

D) Determinar que en esa Junta quede aprobado el convenio ó sobreseído el expediente, sin ulteriores trámites.

2.º Para que desaparezca la anómala situación que autoriza hoy á cobrar y no pagar, deberá ordenarse:

a) Que la suspensión de pagos no produzca el efecto de entorpecer los procedimientos judiciales promovidos ó que intenten promoverse contra el deudor, exceptuando únicamente la venta de bienes en la vía de apremio, que no podrá realizarse hasta que la proposición de convenio fuera desechada.

b) Que esta suspensión no pueda durar más del término que se señale, que podrá ser de dos meses, bastando su transcurso para que quede el acreedor en libertad de continuar las actuaciones, si no se le ha comunicado antes la resolución favorable de la Junta.

c) Que aun de esa suspensión deberán exceptuarse los juicios en que se persigan bienes hipotecados ó dados en prenda.

3.º Para facilitar la acción de los acreedores perjudicados debe prescribirse:

a) Que se sustancien breve y rápidamente los incidentes que cualquier acreedor promueva, siguiéndose en ramo separado para no entorpecer la reunión de la Junta.

(1) Hablamos de exhortos porque esa es la forma que nuestras leyes de procedimientos admiten para la práctica de diligencias judiciales fuera del lugar del juicio; pero si se estima conveniente romper esos moldes, puede admitirse, como mucho más breve y económico, el medio propuesto por el Fomento del Trabajo Nacional, de hacer las citaciones por medio de cartas-circulares certificadas, dando fé el actuario de haberlas depositado en la oficina de Correos.

B) Que los libros y documentos del comerciante suspenso se presenten al Juzgado al mismo tiempo que la proposición de convenio, para que puedan examinarse sin exacción de derechos por cuantos acreedores lo estimen necesario.

C) Que la inexactitud en el balance, ó la alteración en el activo y pasivo, desacordes con los libros de contabilidad, se estime como delito de falsificación.

D) Que se califique de defraudación, y se pene en tal concepto, todo género de simulaciones ó confabulaciones entre el deudor y cualquiera de los acreedores.

4.º Para impedir privilegios injustificados parece oportuno disponer:

a) Que en el caso de aprobarse en la Junta la proposición de convenio, todos los acreedores que hayan realizado sus créditos durante el período de la suspensión, ó un mes antes, tengan que abonar á los demás el interés legal de las sumas recibidas antes del plazo convenido para la generalidad.

b) Que esos mismos acreedores, si el convenio no llega á cumplirse en todas sus partes, deban devolver á prorrata las cantidades que hubieran recibido, hasta conseguir que todos los créditos sean atendidos proporcionalmente, sin preferencias á favor de ninguno.

c) Que se estime como cómplices de la defraudación á los acreedores que se confabulen con el deudor para adquirir algún privilegio que á los demás no se conceda.

Podrá quizás parecer á alguien que las medidas que proponemos son demasiado enérgicas ó radicales; pero contra ese cargo hemos de defendernos, sosteniendo que las enfermedades crónicas, graves ó inveteradas, no se curan con paliativos, cuando exigen revulsivos enérgicos; pues, como dice el vulgo, "á grandes males, grandes remedios;" y sería perder lastimosamente el tiempo, sin lograr el fin apetecido, si nos entretuviéramos en dictar reglas de procedimiento, inspiradas en añejas doctrinas, que la experiencia ha señalado como ineficaces, perjudiciales ó insuficientes. Si queremos combatir el mal en su origen y arrancar los vicios de raíz, es preciso atacarlos con energía y decisión, cortando por lo sano, pues sólo de esa suerte lograremos que las suspensiones de pagos cumplan con el fin para que se crearon, salvando situaciones difíciles y favoreciendo á los deudores desgraciados y á sus acreedores legítimos, sin temor de que se aprovechen de esas ventajas los que hasta ahora han encontrado en la ley un medio cómodo de explotar sin responsabilidad alguna á los incautos que les concedieron un crédito indebido.

Conocido el punto donde radica el mal, y meditado el plan curativo, todos debemos contribuir, cada cual dentro de su esfera, á procurar el remedio; y al comercio honrado interesa, en primer término, conseguirlo, por ser el paciente que sufre las consecuencias de ese estado patológico. Á él, pues, toca acudir al poder legislativo, utilizando cuantas ocasiones se le presenten, hasta obtener la reforma de la ley de Enjuiciamiento civil, bajo las bases indicadas, ú otras que parezcan más eficaces, en cumplimiento del precepto consignado en el artículo 2.º de la ley de 10 de Junio de 1897, que es obligatorio para el Ministro de Gracia y Justicia.

II

Quiebras

Dijimos antes que el comercio vive del crédito, y añadiremos ahora que éste sólo se sostiene cumpliendo escrupulosamente todas las obligaciones; atendiendo con exactitud, por ninguna causa interrumpida, á todos los compromisos; pagando religiosamente todas las deudas en el plazo fijado y en el día mismo en que vencen, sin prórrogas ni dilaciones, que nunca son lícitas para el comerciante; en una palabra: desenvolviendo los negocios con una precisión cronométrica.

Cuando esa regularidad no puede sostenerse, bien sea por desgracias ajenas á la voluntad del comerciante, ó por descuidos, abandonos, desaciertos ó malicias; cuando el comerciante no puede cumplir sin aplazamientos sus obligaciones, ni recoger los vencimientos en el día fijo que tienen señalado, entonces viene el desequilibrio, desaparece el crédito instantáneamente y como por ensalmo, y ya no es posible la vida del comercio.

Ante ese conflicto, la ley acude presurosa á salvar los intereses que los acreedores del comerciante tienen en peligro, procura adoptar enérgicas medidas para evitar abusos y poner á buen recaudo los bienes que constituyan el activo, y prepara el medio de imponer el debido correctivo á los que hayan procedido con manifiesta culpabilidad; pero esas medidas de precaución, necesarias é indispensables, no se adoptan sin ocasionar graves perjuicios, porque suspenden los negocios, cortan las relaciones mercantiles, producen alarma y dan lugar á procedimientos largos y costosos, que en la mayoría de los casos consumen el caudal que debiera servir para el pago de las deudas.

La quiebra, que así se llama el estado en que se halla el comerciante que no puede cumplir sus obligaciones, es una medida tan radical que corta de un solo golpe la vida normal del comerciante; y aun convencidos de los males que produce, tenemos que aceptarla como medio de evitar otros mayores, sufriendo los perjuicios que origina, en la seguridad de que, si no admitiéramos ese recurso, habrían de ocasionarse otros más graves é irreparables.

Cortas son las diferencias que separan sobre este punto á las legislaciones de los distintos países; y concretándonos al nuestro, bien poco se progresó en 1885 al publicar el nuevo Código de Comercio, lo cual parece indicar que la materia que nos ocupa no es susceptible de grandes mejoras.

Sin embargo, creemos que debe reformarse en algunos puntos importantes que vamos sucintamente á tocar con la debida separación.

1.º Convenio entre el quebrado y sus acreedores.

Concedemos primordial atención á este punto, convencidos de que, en trabajos de la índole del que acometemos, debe atenderse, en primer término y casi exclusivamente, á la parte práctica, echando á un lado las lucubraciones científicas y dejando atrás los exclusivismos de escuela. No negamos el interés y la transcendencia de los profundos estudios filosóficos é históricos, pero debemos dedicar preferentemente nuestra atención á investigar los resultados positivos, en el orden mercantil, de las leyes vigentes y de las reformas que puedan aconsejarse.

Siguiendo ese criterio, ¿cuál es el fin principal que debe procurarse en los juicios de quiebra? Entendemos como lo más práctico aspirar á que los acreedores sufran en sus intereses el menor perjuicio posible, ya que, desgraciadamente, llegado este caso, no podrá evitarse por completo. ¿Y quiénes son los que en primer grado deben resolver ese punto? Indudablemente los mismos acreedores, porque sus intereses son los que se ventilan en la quiebra; y si no es factible obtener entre ellos la unanimidad de pareceres, porque se trata de muchos y con aspiraciones encontradas, habrá que someterlos á la ley de las mayorías, que, si no es muy justa en rigurosos principios, se acepta en todos los órdenes de la vida y se admite en estos mismos procedimientos.

Hé aquí la razón en que nos apoyamos para sostener que debe facilitarse el convenio entre los acreedores y el quebrado; y como no nos satisfacen las prescripciones legales sobre este punto, vamos á indicar brevemente los defectos que notamos y los medios más adecuados de corregirlos.

El artículo 898 del Código de Comercio vigente ordena que “en cualquier estado del juicio, terminado el reconocimiento de créditos y hecha la calificación de la quiebra, el quebrado y sus acreedores podrán hacer los convenios que estimen oportunos;” y agrega que “no gozarán de este derecho los quebrados fraudulentos, ni los que se fugaren durante el juicio de quiebra.”

Como se ve, el espíritu de la ley, siguiendo la doctrina que expone Estriche en su *Diccionario razonado de Legislación y de Jurisprudencia*, es de prevención contra el quebrado, partiendo del supuesto de que el convenio es un derecho que sólo á él favorece; y de ahí nacen las limitaciones que impone y las condiciones que exige.

No es ese nuestro criterio. Creemos que el convenio entre el quebrado y sus acreedores puede favorecer tanto á aquél como á éstos, y por ello debe facilitarse su celebración, cuidando sólo la ley de evitar corruptelas y de impedir inteligencias fraudulentas.

Sin duda que al quebrado interesa salvar su situación y llegar á un acuerdo con los acreedores; pero no importa menos á éstos evitar que el juicio de quiebra siga todos sus trámites, interminables y ruinosos, y conseguir que la masa de bienes que constituye el activo se dedique cuanto antes, y con la menor depreciación, al pago parcial de las deudas, ya que no conservarán ilusiones de conseguir el reintegro total de sus créditos. El mal se ha originado cuando el comerciante tiene que presentarse en quiebra; lo que importa después *es* atenuarlo y limitar sus efectos, antes que se pierda toda esperanza de salvación.

Bajo este punto de vista, sostenemos que el artículo antes copiado debe reformarse en el sentido de admitir el convenio en cualquier estado del juicio, sin limitación alguna, y hasta exigir que se intente en el mismo momento de declarar la quiebra, á semejanza de los actos conciliatorios, que son el preliminar indispensable de los juicios civiles y aun de algunos de carácter criminal. Analicemos cada una de las restricciones de ese artículo, y se verá cómo la reforma que aconsejamos atiende mejor al bien de los interesados en esta clase de asuntos.

La primera limitación que se impone es la de esperar á que termine el reconocimiento de créditos, y eso obedece al deseo de conocer el grado de preferencia de cada uno de los acreedores y la legitimidad de su derecho para intervenir en la Junta, donde ha de discutirse y votarse el convenio.

No negaremos que el deseo del legislador es plausible y que busca las mayores garantías de acierto y de justicia, poniendo trabas que impidan la corrupción del sufragio, ya naciera ese daño de la ocultación del carácter preferente de algunos créditos, ya tenga su origen en haber emitido su voto supuestos acreedores que no tenían derecho á ello. En el rigorismo teórico, la medida es acertada y prudente; pero, como es preciso no olvidar las impurezas de la realidad, que tantas veces nos obligan á ceder en la intransigencia de los principios, creemos más acertado contentarnos con lo menos malo, sin aspirar á la perfección absoluta, que suele ser el escollo donde se estrella toda idea progresiva.

Después de todo, esa limitación podría disculparse en el Código antiguo; pero después de la reforma de 1885, donde se estableció la suspensión de pagos, que no es más que un convenio anticipado, no cabe sostener ese criterio. La junta de acreedores se celebra en aquel caso citando á los que se comprendan en las listas que el comerciante presenta al Juzgado, y no se califica previamente la conducta del suspenso, ni se discute la legitimidad de los créditos, ni se fija su orden de preferencia, ni se adopta medida alguna preventiva en evitación de los errores ó maliciosas alteraciones que puedan hacerse, y que en realidad se hacen en no pocos casos.

Sin embargo, para que todo sea anómalo, nos encontramos con que el anterior Código, en su artículo 1,147, admitía el convenio en cualquier estado del procedimiento, desde la primera junta general de acreedores, y sólo exigía dar cuenta de lo que constara en el expediente de calificación hasta aquella fecha; mientras que el nuevo Código, que dió una amplitud excesiva á ese mismo convenio antes de la declaración de quiebra, restringe los medios de obtenerlo, cuando ya se ha promovido el juicio universal, estableciendo apla-

zamientos que no están en armonía con la atrevida reforma que establece.

Si aquel procedimiento, que no es el más prudente, se ha admitido ya al tratar de las suspensiones de pagos, no hay razón alguna especial que impida seguirlo dentro del juicio de quiebra; y como somos partidarios de facilitar ese convenio, por ser la única solución favorable á que puede aspirarse en esa clase de asuntos, opinamos que debe procederse con igualdad de criterio en todos casos, autorizando expresamente la ley que pueda intentarse el convenio entre el quebrado y sus acreedores en cualquier estado del juicio.

Lo que sí debe procurar el legislador, lo mismo en la quiebra que en las suspensiones de pagos, es que se faciliten medios á los acreedores para impugnar el acuerdo, si se ha logrado obtener por procedimientos ilícitos. Para ello basta con incluir entre las causas que pueden servir de fundamento para oponerse á la aprobación del convenio la inexactitud en el número de los acreedores ó en la importancia de sus créditos, siempre que esas alteraciones puedan influir en el resultado definitivo de la votación; pero este incidente deberá promoverse después de celebrada la junta, y no antes, para evitar que maliciosamente se dificulte la continuación del juicio.

La otra limitación impuesta por el citado artículo 898 es la de esperar á que se haga la calificación de la quiebra; y ese aplazamiento obedece á la prohibición que el mismo artículo consigna de celebrar convenio alguno cuando se trate de quebrados fraudulentos ó que se fugaren durante el juicio de quiebra.

Tampoco creemos que deba sostenerse esa prohibición, porque ya dijimos, y hemos de repetirlo, que el convenio es un derecho que se concede bajo el equivocado concepto de que sólo beneficia al quebrado cuando, en la generalidad de los casos, tanto ó más que á él favorece á los acreedores, que así terminan de un golpe el juicio de quiebra, decidiendo la cuantía del descuento que han de sufrir en sus créditos. El estado de indecisión y de duda es el más mortificante para todos, y especialmente para el que se dedica al comercio, que necesita regularizar sus operaciones, limitar todo género de riesgos y venturas, y liquidar pronto los negocios, aunque sea con pérdida; y el convenio ofrece la ventaja inapreciable, si no tuviera otras, de concluir con las dudas y despejar la situación.

Toda quiebra produce alarma en los comerciantes directa ó indirectamente interesados en ella, que temen los aplazamientos del juicio, las molestias que origina, los disgustos que proporciona y el descrédito que de rechazo puede alcanzarles. Si se les consultara sobre sus deseos, seguramente por voto unánime optarían por una solución pronta y radical, que les hiciera conocer cuanto antes el resultado, sin esperar el desenlace definitivo, que su imaginación le presentará como más negro y fatídico de lo que en realidad pudiera presumirse, pues el pesimismo se apodera fácilmente en estos casos de ánimos apocados y que miran con recelo, en mucha parte justificado, todo lo que se refiere á actuaciones judiciales.

No pretendemos con esto favorecer, ni aun indirectamente, á los quebrados fraudulentos ó que abandonan la defensa de los intereses que se les confiaron. Promovido el juicio de quiebra, estimamos que la celebración del

convenio no debe ser obstáculo, ni aun por acuerdo unánime de los acreedores, para que siga de oficio el ramo separado en que se trate de la calificación; y si el resultado fuera desfavorable para el deudor, teniendo los procedimientos un carácter criminal, ya cuidarán los Tribunales de que no queden impunes los delitos, sufriendo el culpable la pena merecida, con la subsiguiente obligación de indemnizar cuantos perjuicios originara su conducta.

Así se evita que un deudor fraudulento se beneficie á costa de sus acreedores; se cumple la ley, que exige el castigo de los delitos, y no se dificulta un convenio, que rara vez dejará de ser acogido con fruición por los principales interesados en la quiebra.

2.º Graduación de los créditos.

Los artículos 908 y 909 del Código de Comercio determinan los bienes que deberán considerarse como de dominio ajeno, por no haberse transferido al quebrado su propiedad por un título legal é irrevocable, los cuales quedan, por consiguiente, á disposición de sus legítimos dueños; y en primer lugar se citan los bienes dotales inestimados y los estimados que se conservaren en poder del marido, agregando en segundo término los parafernales, bien se hayan conservado en la forma que los recibió el marido, bien se hayan subrogado ó invertido en otros, con tal de que todo ello conste en el Registro Mercantil.

No es éste el lugar oportuno para explanar nuestro juicio sobre las disposiciones del Código Civil referentes á los derechos de la mujer dentro del matrimonio con relación á los bienes. Quizá parezca extraña nuestra teoría, expuesta lisa y llanamente, sin razonar los poderosos motivos en que nos apoyamos; pero ante la necesidad de ser sinceros, diremos que el sistema dotal y de gananciales, que el derecho civil admite como régimen general en el matrimonio, nos parece injusto, expuesto á graves abusos y causa eficiente de innumerables perjuicios.

Para no entrar en detalles que son ajenos á este trabajo, nos bastará indicar que por ese sistema la mujer participa, en el orden de los bienes, de todas las ventajas, sin sufrir ninguno de los quebrantos; que se utiliza de la mitad de las ganancias, si llegan á obtenerse, y no contribuye en manera alguna á las pérdidas, si por acaso hay que sufrirlas. Un contrato de esa índole, que no fuera entre marido y mujer, se calificaría de *leonino*, debiendo merecer el mismo calificativo, por duro que parezca, aunque sea establecido por la ley y sancionado por la costumbre.

Concretándonos, bien apesar nuestro, á lo que es objeto del tema, diremos que las prescripciones citadas del artículo 909 del Código de Comercio son la mejor demostración de que el régimen dotal es injusto, cuando, al desarrollar sus lógicas consecuencias, se producen desigualdades notorias y se otorgan privilegios inadmisibles, que vienen á perjudicar á terceras perso-

nas, y que ofrecen ancho campo para desarrollar sus malas artes á los quebrados fraudulentos. Vamos á demostrarlo fácilmente.

Se dedica una persona al comercio, y emplea en sus negocios, no sólo el capital propio, sino también el que ha recibido de su mujer, lo mismo en bienes dotales que en parafernales, y, acudiendo al crédito, utiliza el caudal de todos los que sostienen con él relaciones mercantiles. Sobreviene el estado de quiebra, sea cualquiera la causa que lo origine, y no alcanzando el activo á cubrir el pasivo, se ven obligados todos los acreedores, por dura é imperiosa necesidad, á sufrir una desmembración de sus créditos, que en algunos casos puede llegar á la completa pérdida de sus intereses. Pues bien; la mujer del quebrado retira, en primer lugar, antes que nadie y sin quebranto alguno, todos sus bienes dotales y parafernales. ¿Es esto justo? Nó, y mil veces nó.

En el desastre que significa la quiebra, la mujer del quebrado debe ser la primera á contribuir con sus bienes para salvar la situación. Si es originada por desgracias irremediables, atendiendo á que la compañera de toda su vida, la que está unida á él por lazos indisolubles, la que es madre de sus hijos, no puede permanecer sorda ante los clamores de su esposo, y recoger con egoísmo incalificable todos sus bienes, sin tender una mano cariñosa á su desgraciado compañero, olvidando la estrecha unión que se les exige, hasta constituir *duo in carne una*, como dijo San Pablo; y si la quiebra se origina por causas imputables al marido, tampoco se justifica su privilegio de retirar el caudal propio, cuando quizá no esté exenta de toda culpa, bien por vicios de administración, bien por exigencias injustificadas ó por lujo desenfrenado. De cualquier modo, si la mujer acompañó al marido mientras la fortuna le sonreía, y disfrutó á medias con él de los bienes que administraba, justo será que en los días nefastos no separe sus bienes y participe también en la misma proporción de los males que sobrevengan.

Creemos firmemente que una mujer digna, virtuosa y que subordine su conducta á los principios de moral y de justicia, ofrecerá todos sus bienes y renunciará sus derechos legales para contribuir con su óbolo á disminuir el pasivo. Más de un ejemplo pudiéramos citar de actos de ese género, pero la ley no debe esperar el sacrificio voluntario, buscando heroínas en las mujeres de los quebrados; y si empieza por decirles que tienen derecho á retirar todos sus bienes, con poco que ayude el egoísmo innato en nuestra flaca naturaleza, otro poco que influyan las consideraciones de personas *prudentes*, y mucho que sirva el recuerdo de los hijos y el temor de verlos reducidos á la miseria, no podremos extrañarnos de que concluyan por ahogar sus mejores impulsos, convenciéndose á sí propias de que no deben renunciar un derecho que presumen justo cuando la ley lo concede.

Hemos sostenido que la mujer debe contribuir en primer término á sufrir las consecuencias de la quiebra de su marido; pero, si no se quiere llegar á ese extremo por razones que no alcanzamos, habrá que conceder que debe estimársele en igual grado que los demás acreedores. Unidos la mujer y el marido en una sociedad legal que se llama de gananciales, debiera tener ella las mismas obligaciones, ya que tiene iguales derechos, que cualquier otro socio, y bajo ese supuesto procede que soporte en la misma pro-

porción las pérdidas que las ganancias; pero si, por convencionalismos que no nos seducen, olvidamos que existe una verdadera sociedad, reconócese, al menos, que la mujer es una acreedora del marido, obligada, como los demás, á sufrir á prorrata el descuento que exija la comparación del activo con el pasivo.

Todos los que sostenían relaciones mercantiles con el quebrado exponían sus intereses, confiados en el crédito del comerciante, y en igualdad de circunstancias se encuentra la mujer que voluntariamente contrajo el matrimonio y aportó al mismo sus bienes para que los administrara el marido. Si sobreviene la quiebra, y con ella la imposibilidad de pagar la totalidad de las deudas, así como los acreedores tienen que sufrir un perjuicio, sopórtelo ella, acreedora como los demás, en igual grado y proporción, puesto que no concurre á su favor motivo alguno que le dé inmunidad ó le conceda privilegio.

Es más: unidos tan íntimamente marido y mujer, todo lo que ésta salve de sus bienes ha de entrar nuevamente en poder de aquél, y los acreedores á quienes se ha desmembrado su crédito, si es que no le perdieron por completo, verán con desagrado, ó más bien estimarán como una ofensiva procacidad, que el culpable de los perjuicios que se les irrogaron siga viviendo tranquilo, y quizás en la opulencia, con el producto de los bienes de su mujer.

Á tal extremo llega la ley en su injusticia que, no sólo estima como bienes de dominio ajeno los parafernales de la mujer, sino también los dotales, ya sean estimados ó inestimados; y es de advertir que hay casos en que la mujer pierde legalmente el dominio de sus bienes propios, y es una ficción de la ley, por no decir una falsedad manifiesta, el estimarlos como de su propiedad, al sólo efecto de que pueda recogerlos sin quebranto alguno.

El artículo 1346 del Código Civil dice que será estimada la dote, "si los bienes en que consiste se evaluaron al tiempo de su constitución, *transfiriendo su dominio al marido* y quedando éste obligado á restituir su importe."

Con arreglo á esta definición auténtica, podemos afirmar que los bienes dotales estimados son de la propiedad del marido, sin que la mujer conserve otro derecho que el de pedir en su día la restitución de su importe; y si es así, no puede sostenerse que esos bienes, si existen todavía en poder del marido al tiempo de declararse en quiebra, son de *dominio ajeno*, como equivocada é injustamente declara el Código de Comercio.

Se dirá, quizás, que el precepto del Código civil que citamos es posterior al del Código de Comercio; pero, con objeto de desvanecer todo género de dudas, recordaremos que en nuestro derecho antiguo, tanto la dote como los parafernales, pasaban en algunos casos á poder del marido, de acuerdo con la ley 17, título XI, partida 4.^a, que dice: "E todas estas cosas, que son llamadas en griego paraferna, si las diere la muger al marido, *con entención que aya el señorio dellas*, mientras que durare el matrimonio, *auerlo ha; bien assi como de las quel da por dote.*"

Dedúcese de lo expuesto que, apesar de que las obligaciones de la mujer con respecto á su marido, son más estrechas que las de cualquier extraño, la ley no ordena siquiera que se equipare á los demás, sino que la autoriza para

retirar de la masa de bienes sus dotales y parafernales, suponiendo que no son de la propiedad del marido, ni aun en el caso de ser estimados; lo que constituye una herejía jurídica, al par que una grave injusticia, que quisiéramos lograr se borrara de nuestros Códigos.

3.º Prelación de los acreedores.

Las innovaciones introducidas en la moderna legislación mercantil acerca de este punto se dirigen casi exclusivamente á armonizarla con las prescripciones de la ley hipotecaria, que estaba en desacuerdo con los antiguos preceptos, y como no nos satisfacen por completo, vamos á indicar las reformas que nos parecen convenientes, apesar de que en la exposición de motivos se dice, sin pecar de modestos, que las nuevas disposiciones se apoyan en los principios fundamentales del derecho moderno, *acertadamente combinados*.

§ I. Acreedores singularmente privilegiados.

El primer grado de los acreedores singularmente privilegiados, con relación á los bienes muebles, se constituye, según el artículo 913 del Código Mercantil, con los acreedores "por gastos de entierro, funeral y testamentaria"; y si esos gastos son ocasionados por la defunción del deudor común, no tenemos inconveniente en admitir el privilegio, pero consignándolo expresamente en evitación de que se haga extensivo á otros casos que no merecieran igual atención, é incluyendo además los gastos de abintestato; porque no se explica la distinción entre el juicio universal de testamentaria y el de abintestato, que sólo difieren en que el difunto hubiera ó no otorgado testamento.

Admitiendo la preferencia del trabajo personal, y respetando la que se concede á los acreedores alimenticios, pudiera hacerse la ampliación que consigna el artículo 1,924 del Código Civil, comprendiendo las anticipaciones hechas en comestibles, vestido y calzado, durante el último año, porque todo ello se considera como alimentos en el artículo 142 del referido Código.

§ II. Créditos mercantiles y comunes.

En el mismo artículo 913 del Código de Comercio que antes citamos se concede preferencia á los acreedores por operaciones mercantiles sobre los créditos que procedan de negocios civiles; y en verdad que no alcanzamos la razón de ese privilegio, ni nos convencen los fundamentos que se alegan en la misma exposición de motivos, al consignar que, "como el estado de quiebra se ha introducido para estimular y fomentar el desarrollo del crédito, cuando no exista motivo especial de preferencia en favor de algunos

créditos, la ley debe dársela, tratándose de acreedores comunes, á los que lo sean por operaciones mercantiles."

Ni creemos que el estado de quiebra se haya introducido para estimular y fomentar el desarrollo del crédito, ni admitimos que sea aquel el medio mejor de conseguir ese fin; ni aun siéndolo, se logra el objeto concediendo preferencias injustificadas á determinados acreedores.

El estado de quiebra es un mal necesario que obedece á la necesidad de solucionar situaciones difíciles, protegiendo los intereses de acreedores comprometidos por la desgracia ó la malicia de un deudor; y al declarar ese estado, desaparece el crédito del quebrado y se lesiona el de los acreedores, y aun el de muchos que indirectamente con ellos se relacionan. ¿Cómo puede decirse, por tanto, que la quiebra fomenta aquello mismo que quebranta? Se estimularía el desarrollo del crédito impidiendo que un comerciante pudiera llegar al estado de quiebra, pero nunca se consigue ese objeto admitiendo una situación que sólo es disculpable por la dura ley de la necesidad, toda vez que en ella se trata de alterar y modificar las obligaciones contraídas por el deudor, pagando sólo en parte ó dejando de pagar deudas legítimas.

Admitiendo ahora en hipótesis que la quiebra tenga el objeto de fomentar el crédito, sostenemos que se contraría ese fin concediendo preferencias á unos sobre otros acreedores, porque los privilegios deben siempre tener un fundamento indiscutible, y una razón que nadie ponga en duda, para que puedan reconocerse y disculparse. De lo contrario, se conculcan los principios de equidad y de justicia, y se falta á las reglas de igualdad, que son la base del derecho. Tan respetables son las obligaciones de carácter civil como las mercantiles, y tan obligatorios los contratos de uno y otro orden; no hay, pues, motivo alguno para atender con preferencia á las deudas procedentes del comercio, dejando sin solventar otras que procedan de negocios comunes.

El crédito de una persona, sea ó no comerciante, se robustece y fomenta cuando atiende por igual á todos los compromisos y cumple todos los pactos, sin discutir su origen, siempre que sean legítimos; y cualquiera que deje de pagar el precio convenido, por ejemplo, en la compra de un objeto que destina á su uso particular, pierde su crédito y es tachado de informal, aun cuando cuide de que no se le proteste una sola letra de cambio y deje de abonar á su vencimiento un sólo pagaré de comercio.

Encontramos, además, contradicción entre esa doctrina y la consignada poco antes en la misma exposición de motivos, al justificar, siguiendo el ejemplo de Bélgica y de la jurisprudencia francesa, que en el nuevo Código se suprimiera la distinción que hacía el antiguo entre las obligaciones y deudas del comerciante, omitiendo el precepto que declaraba la procedencia de la quiebra sólo en el caso de que la cesación de pagos recayese sobre obligaciones contraídas en el comercio.

Allí se dice que "el comerciante que no paga al corriente sus obligaciones *particulares*, porque carece de fondos, quebranta su crédito en el mero hecho de hacer público que no tiene recursos para cubrir las necesidades más ineludibles de la vida; lo cual acusa, además, un grave tras-

torno en la marcha de sus negocios mercantiles, que trae consigo, necesariamente, la imposibilidad de pagar las obligaciones procedentes de los mismos. " Y si se admite esa razón como buena para que se declare la quiebra cuando el comerciante no paga las deudas particulares, aunque cumpla todos sus compromisos mercantiles, la misma razón debe servir para que se equiparen unas y otras obligaciones y se atienda á ellas en la debida proporción.

§ III. Créditos escriturarios ó por títulos mercantiles.

Tampoco estimamos justo el privilegio concedido á los acreedores escriturarios, conjuntamente con los que lo fueren por títulos ó contratos mercantiles en que hubiere intervenido agente ó corredor, sobre los acreedores comunes de cualquier clase. La intervención en un contrato del notario, agente ó corredor, no da más fuerza á las obligaciones estipuladas, ni en el derecho civil, desde la publicación de la célebre ley del Ordenamiento de Alcalá, que dispuso que en cualquier manera que parezca que uno se quiso obligar, quede obligado; ni en el derecho mercantil, donde los artículos 51 y siguientes del Código declaran válidos los contratos, cualquiera que sea la forma en que se celebren, reconociendo expresamente los que se otorgan por correspondencia ó por telegramas con las limitaciones que fija.

Ahora, si lo que la ley quiere evitar es que se simulen créditos, y estima que ese peligro es mayor cuando no intervienen en los contratos aquellos funcionarios, no creemos que el medio adoptado sea el más propio para conseguir ese fin. Así como el citado artículo 51 dice que la declaración de testigos es insuficiente por sí sola para probar la existencia de un contrato cuya cuantía exceda de 1,500 pesetas, á no concurrir con alguna otra prueba, también ha podido adoptar otras medidas de precaución análogas á las que se consignan en el artículo 1,227 del Código civil, para que produzca efecto la fecha de un documento privado; advirtiendo que, en lo mercantil, es más fácil demostrar la autenticidad, porque se trata de comerciantes que están obligados á llevar sus libros con ciertas formalidades, y á conservar y copiar su correspondencia, con lo que, en muchos casos, no ofrecerá dudas la certeza del contrato privado en la fecha que se le asigne.

§ IV. Pago de los créditos por orden de fechas.

Pasando á otro género de consideraciones, tampoco creemos que debe subsistir el precepto del número 2.º, artículo 916 del Código de Comercio, en cuanto ordena que los acreedores escriturarios y por títulos mercantiles intervenidos por agentes ó corredores cobren por el orden de fechas de sus títulos.

Espontáneamente reconoceremos que, según un principio del derecho, *qui prior est tempore, potior est iure*; y aún añadiremos que su abolengo es tan ilustre y respetable, como que procede de las leyes del Digesto; pero no por ello hemos de aceptarlo ciegamente, cuando no lo estimamos justo, al menos aplicado al caso que nos ocupa.

La obligación que tiene el deudor de pagar sus deudas, es, indisputa-

blemente, idéntica en todos los casos, sin distinción de fechas, á no haber razones, como en los créditos hipotecarios, para preferir los más antiguos, ó, como en los refaccionarios, para dar la preferencia al último. En todos los demás el deudor debe atender por igual á sus acreedores; y cuando motivos imprevistos le impidan cumplir sus obligaciones por completo, exigiendo un descuento, entonces ese quebranto debe ser proporcional para todos los acreedores, sin atender á las fechas en que se contrajeron las deudas, porque la última lo mismo que la primera, la más reciente como la más antigua, merecen igual respeto y deben ser atendidas en idénticas condiciones.

Aquel principio de derecho que antes citábamos tiene justa aplicación tratándose de derechos reales, porque esa es la base de la actual organización del crédito territorial, que no se concibe sin un Registro de la Propiedad donde se anoten los derechos y tengan prelación por orden cronológico; pero en las acciones personales no concurre igual razón, y debe hacerse caso omiso de esa regla para atender á otra que estimamos más justa: la de igualdad entre los acreedores.

Ya las leyes, tanto civiles como mercantiles, han consentido en olvidar ese principio. Aquéllas, por el artículo 1,929 del Código Civil, ordenando que los créditos comunes se paguen sin consideración á sus fechas; y éstas, por el mismo artículo 916 del Código de Comercio, que establece como regla general la de que los acreedores perciban sus créditos sin distinción de fechas, fijando después las excepciones que estima oportunas.

Hemos convenido en que los créditos escriturarios, ó intervenidos por agentes ó corredores, no tienen mayor fuerza y eficacia, en buenos principios, que los demás créditos comunes; y asimilados todos ellos, tampoco hay fundamento bastante para que éstos se paguen sin obedecer al orden de sus fechas, y aquéllos adquieran preferencia según su antigüedad. Por ello insistimos en que se equiparen todas las deudas, sufriendo cada una de ellas, á prorrata, el descuento que la desgracia imponga, sin dar lugar á justas quejas del que se ve postergado en su derecho por otro acreedor, quizá no tan legítimo como él, sólo por haberse anticipado algunos días en la celebración del contrato.

§ V. Efectos del embargo ó sentencia firme.

Acabamos de fijar la regla general que, en nuestro concepto, debe seguirse para el pago de los créditos, sin consideración á sus fechas; pero necesitamos ahora consignar una excepción, cuando se trata de acreedores que hayan logrado el embargo de bienes del deudor para asegurar sus créditos. Bien sabemos que nuestras leyes civiles, y especialmente la hipotecaria, niegan al embargo el carácter de derecho real, estando ese punto resuelto en repetidas decisiones de la Dirección general de los Registros Civil y de la Propiedad y del Notariado, y en sentencias del Tribunal Supremo, que unánimes declaran que la anotación preventiva de un embargo no crea ni declara ningún derecho, ni altera la naturaleza de las obligaciones, ni convierte en real é hipotecaria la acción que anteriormente no tenía ese carácter, ni lastima los derechos que sobre las fincas puedan alegar terceras

personas; pero es que creemos que ese principio no es justo, y que debe reformarse, de acuerdo con lo dispuesto en otras naciones, que conceden al embargo los efectos de una hipoteca.

En el celebrado trabajo que la Comisión de Códigos publicó para consignar los motivos y fundamentos de la ley hipotecaria, se condensan las razones de ese precepto, diciendo que las anotaciones preventivas de embargo no declaran ningún derecho, y "no puede decirse de ellas que son el premio de la carrera, como en otra nación se ha dicho, asimilando el empeño de los acreedores para anticiparse á obtener la anotación, al afán con que se disputa la llegada al término en las carreras de caballos; no son un favor innecesario que se da al acreedor más exigente; no modifican el carácter de las obligaciones, cambiando las simples en hipotecarias, ni hacen al juez agente de los litigantes, compeliéndolo á que supla la negligencia del acreedor y le otorgue garantías que tal vez el deudor mismo, al tiempo de obligarse, no habría constituido."

Lamentamos más que nadie la necesidad de otorgar ventajas al acreedor desconsiderado y exigente, postergando al que no quiso molestar á su deudor; pero, dejando aparte sentimentalismos vagos, y descendiendo á la impura realidad, no es dudoso que el más intransigente obtiene favores que, si no se le dispensan de buen grado, se otorgan cediendo á presiones que no es fácil eludir; y si hay un acreedor que acude á los Tribunales, y logra el embargo de bienes del deudor, debe reconocérsele alguna ventaja sobre el que descuidó sus intereses sin defenderlos con la misma actividad.

La ley ha otorgado antes preferencia á otro acreedor, aún más exigente, que, sin fiarse del crédito personal, obtiene una garantía hipotecaria; ¿por qué no ha de producir los mismos efectos la hipoteca judicial, que así se llamó antes el embargo? Ni el juez se convierte por ello en agente de los litigantes, puesto que éstos son los que reclaman su derecho, y aquél sólo les reconoce lo que la ley concede, ni debemos hablar en tono depresivo de carreras de caballos, cuando esa misma ley otorga el gran premio al acreedor más desconfiado y con mayores aptitudes para el hipódromo, al que, desde el primer momento, reclama una hipoteca é inscribe en el Registro su derecho.

Dedúcese de lo expuesto que debiera asimilarse el embargo á una hipoteca, para que tuviera preferencia por orden de fechas; pero, al menos, habrá que suplir la omisión de nuestro Código de Comercio, en desacuerdo con el Civil, que equipara con los créditos escriturarios aquellos otros reconocidos por sentencia firme, sobre los cuales no hay motivos de desconfianza ni razón para que se releguen al último grado, confundiéndolos con los que no ofrezcan garantía alguna de autenticidad.

4.º Calificación de la quiebra.

En orden á la calificación, pueden simplificarse las prescripciones del Código de Comercio, reduciendo las clases de quiebra á dos: fortuita y cul-

pable. Es verdad que dentro de la culpabilidad hay distintos grados, y que los actos ilegales del comerciante pueden constituir diferentes delitos que merezcan penas diversas; pero la determinación de la responsabilidad criminal encaja dentro del Código Penal, y á éste toca y corresponde definir los delitos y marcar la penalidad que se estime justa, aquilatando los grados de malicia en el autor de los hechos que se hayan realizado.

Cuando se promulgó el vigente Código de Comercio se suprimieron del antiguo las clases de quiebra conocidas por suspensión de pagos y alzamiento; aquélla por constituir un estado preliminar, y ésta por ser una de las formas de la quiebra fraudulenta. Siguiendo el mismo criterio de simplificación, podemos hoy distinguir las quiebras en fortuitas y culpables, que es lo único que interesa para los efectos civiles, reservando al Código Penal la definición de los delitos y la distinción entre los actos justiciables, según la mayor ó menor culpabilidad del autor.

5.º Leyes adjetivas.

La reforma de la ley de Enjuiciamiento civil en esta materia se impone necesariamente, porque el anterior Código de Comercio mezclaba, entre las disposiciones de carácter sustantivo, algunas reglas de procedimiento que, al publicarse el nuevo Código, se omitieron cuidadosamente; pero como la ley de Enjuiciamiento es anterior á 1885, nos encontramos con que se refiere al Código de 1829, y da por supuestos preceptos que hoy no rigen, como todo lo referente á las consecuencias de la declaración de quiebra, que constituía un título especial de la antigua ley, suprimido en la vigente. Por eso opinamos que deben ponerse en relación y armonía ambas leyes, para que obedezcan á un plan fijo y meditado, evitando los inconvenientes que antes señalamos á otro propósito; y que esto debe hacerse con la mayor urgencia para allanar las dificultades que hoy la práctica ofrece en la tramitación de estos asuntos.

Sin descender á prolijos detalles, nos concretaremos á indicar que la ley de Enjuiciamiento que se dicte debe inspirarse en la simplificación de los trámites, economía de gastos, brevedad del tiempo, facilidad de medios de discusión, aseguramiento de los bienes, administración garantida, pagos parciales en cuanto lo permita la entrada de fondos, y liquidación honrada de los negocios pendientes.

Parecerá quizás extraño que, después de habernos detenido en señalar minuciosamente las bases á que debe ajustarse la reforma del procedimiento en las suspensiones de pagos, no hagamos lo mismo al ocuparnos en las quiebras; pero, aparte del deseo de no ser molestos, como tendríamos que serlo acometiendo un trabajo tan árido y pesado, obedece principalmente nuestra determinación á que estimamos estéril esa labor enojosa.

Sabido es que el tratamiento de un enfermo requiere un esmerado es-

tudio de los medios terapéuticos que puedan ser eficaces para combatir su enfermedad; porque el médico puede y debe aspirar á la sanidad completa, practicando, si es preciso, cruentas operaciones quirúrgicas; pero cuando se presenta un caso desesperado, y los recursos de la ciencia son inútiles ante el progreso del mal, ya el médico no receta, aconsejando tan sólo que se llame al Notario para hacer testamento, y al sacerdote para que otorgue al moribundo los auxilios espirituales. Así también nosotros, estimando como un enfermo al comerciante suspenso, estudiamos con anhelo, y esperanzados en el éxito, los recursos de la ciencia jurídica para salvar su aflictiva situación; pero, convencidos de que la quiebra es una enfermedad incurable, no perderemos el tiempo en detallar los trámites que deben seguirse en sus procedimientos judiciales; y cuando el último remedio es ineficaz, por no lograrse el convenio, abandonamos al paciente, esperando que los curiales se encargarán de archivar las actuaciones cuando los bienes se hayan consumido en costas; ó lo que es lo mismo, de enterrar al cadáver cuando presente síntomas inequívocos de putrefacción.

Los funestos resultados del juicio de quiebra con nuestros actuales procedimientos son bien conocidos de juristas y comerciantes; por eso unánimes reclaman trascendentales reformas, esforzándose en señalar los vicios y corruptelas de la ley; y por eso los Congresos jurídicos y las Cámaras de Comercio, en sus Memorias periódicas y en sus recientes Asambleas, claman contra el abuso, empleando términos tan enérgicos como la Cámara de Comercio de Cartagena, que califica de rapaces á los actuarios, y citando casos tan notables como el que refiere la Cámara de Málaga de una quiebra, en la que se invirtieron más de cuatrocientas mil pesetas en costas del juicio.

Únicamente vamos á tratar un punto, por ser de sumo interés y muy frecuente en la práctica, sin estar reglamentado en las leyes. Nos referimos á la cesión de bienes que el Código de 1829 trataba en un título especial, sólo para decir qué se entendería como quiebra, título que ha sido suprimido en el vigente Código.

La cesión de bienes parece que debiera ser la forma natural de terminación de una quiebra; porque el comerciante que no ha sabido desenvolver sus negocios con acierto, y que ha perdido el capital propio y parte del ajeno, debiera apresurarse á ceder el resto de los bienes que posee á sus acreedores, para que éstos los distribuyan de la manera más prudente, sin reservarse aquél derecho alguno en un caudal que ya no es suyo. Pero sin discutir ahora esa cuestión, ni sostener que la cesión fuese obligatoria, lo cierto es que en muchos casos se utiliza ese medio, ya en las suspensiones de pagos, ya en las mismas quiebras, sin encontrar en la ley un procedimiento adecuado para esa situación que, en realidad, difiere del juicio de quiebra, y que debe obedecer á reglas peculiares y apropiadas.

Hecha la cesión de bienes, parece que el deudor no debe intervenir en las diligencias sucesivas, y al mismo tiempo es lógico que los acreedores dispongan libremente de los bienes que se les dan en pago, sin sujeción á trámites judiciales, siempre que sea posible, pero con garantías que ofrezcan la seguridad de que han de repartirse equitativamente.

Para conseguir esos fines, deberán observarse las siguientes reglas:

1.^a Propuesta por el deudor la cesión, se convocará á junta de acreedores para discutir si debe ó no aceptarse.

2.^a Aceptada la cesión de bienes, se nombrará una Comisión liquidadora que represente á los acreedores, compuesta de tres ó cinco individuos, según la importancia del caudal ó la complicación de los negocios, y dos suplentes que sustituyan á los propietarios cuando no puedan éstos ejercer el cargo.

3.^a El nombramiento de las personas que han de componer esa Comisión se hará en una forma análoga á la designación de Síndicos, ó sea en dos votaciones distintas, para que tenga representación la minoría.

4.^a Esa Comisión se hará cargo inmediatamente de los bienes, libros y papeles del quebrado, bajo inventario que firmarán, depositando una copia en el Juzgado.

5.^a Cesará desde entonces la intervención judicial, excepto en los casos que se detallen.

6.^a La Comisión nombrará un administrador, bajo su responsabilidad é inmediata inspección, que continúe los negocios pendientes, realizando los créditos y pagando las deudas que se contraigan.

7.^a También designará la misma Comisión un individuo de su seno que prepare la liquidación definitiva, graduando y calificando los créditos, para someterla á la aprobación de los acreedores en una junta que la Comisión convocará particularmente.

8.^a Cualquier acreedor que se estime perjudicado en su derecho podrá apelar al Juzgado de la resolución de esta junta, tramitándose con brevedad el incidente.

9.^a Aprobada definitivamente la graduación de créditos, se harán pagos parciales, siempre que los fondos recaudados permitan entregar, al menos, un 5 por 100.

10.^a Si por renuncia, ausencia ó defunciones, no puede completarse la Comisión con el número de individuos que se estimen necesarios para tomar acuerdos, se convocará una nueva junta extrajudicial, donde se sustituya á los que hubiesen cesado.

11.^a La liquidación definitiva se aprobará en la misma forma, cesando entonces la responsabilidad de la Comisión.

Creemos que esta organización será eficaz para que no se malversen los bienes cedidos por el deudor, evitando gastos judiciales y suprimiendo el juicio de quiebra, que, sean cualesquiera los trámites que se fijen, ha de ser ruinoso para los acreedores y perjudicial para sus intereses.

III

Tribunales de Comercio

Entre todas las cuestiones que se han promovido con motivo del derecho mercantil, ninguna tan debatida, tan prolongada y que tanto interés despierte como la referente á los Tribunales de Comercio. Sin dudar nosotros de la importancia de ese tema, creemos que hay otros más trascendentales para el comerciante, como lo son evidentemente los otros dos que acabamos de desarrollar; pero los debates de jurisdicción y las cuestiones de competencia han gozado siempre del privilegio de afectarnos más profundamente, hasta enconar los ánimos en muchas ocasiones, y no había de ser excepción de esa regla la determinación del tribunal competente para entender en litigios mercantiles.

Claro es que las leyes más sabias y los procedimientos más adecuados son ineficaces, si los jueces encargados de aplicar las prescripciones legales carecen de los conocimientos prácticos en la materia de que se trata, desconocen los usos y costumbres de los litigantes, é ignoran las más rudimentarias nociones de la profesión á que éstos se dedican; pero tampoco el juzgador puede suplir, si se le impone la obligación de aplicar determinadas leyes, las deficiencias de éstas ó los errores del legislador, que, en ocasiones, pueden originar irreparables perjuicios.

Para ordenar debidamente nuestro trabajo, tan fácil por la abundancia de materiales como difícil por estar agotada la materia, comenzaremos por consignar una sucinta ojeada histórica sobre la organización de los Tribunales de Comercio, exponiendo después los distintos criterios que se han sostenido sobre ese punto, para concluir con la exposición de nuestro particular dictamen.

1.º Ojeada histórica.

Desde los comienzos de nuestra legislación se reconoce y confirma la competencia de Tribunales especiales que, sin duda de muy antiguo, estaban organizados en España para resolver las cuestiones judiciales entre mercaderes, y así las Leyes de Partida hablan de los jueces que pusieren los me-

nestrales para que decidieran "sobre aquellas cosas que les acaeciesen en razón de sus menesteres."

Sin embargo, la cédula de privilegios otorgada en Medina del Campo por los Reyes Católicos, en 1494, es la que concedió á la ciudad de Burgos y su cofradía jurisdicción especial para los debates entre mercader y mercader, casi en la misma forma que ha revestido hasta su desaparición; siendo esos privilegios extendidos más tarde por el rey D. Fernando en Sevilla, el año de 1511, á la villa de Bilbao, que los tuvo en cuenta para sus célebres Ordenanzas, y después á los Consulados de Cádiz, Sevilla, Barcelona y otros muchos.

Con esos antecedentes se publica el primer Código de Comercio en 1829, y en él se reconocen los Tribunales de Comercio como competentes para administrar justicia en primera instancia sobre las causas y negocios mercantiles, en todos los pueblos donde existieran ó se crearan Consulados, organizándolos con su prior y cónsules, y determinando que en los demás pueblos conocieran de los mismos asuntos los jueces ordinarios, para reservar siempre la segunda y tercera instancia á las Chancillerías y Audiencias reales, y los recursos de injusticia notoria al Consejo Supremo de Castilla ó al de Indias.

Así continuaron los Tribunales de Comercio hasta que en 6 de Diciembre de 1868 se publicó el Decreto de unificación de fueros, vigente hasta la fecha, en el que se suprimieron esos tribunales especiales, ordenándose que la jurisdicción civil ordinaria conociera de todos los litigios ó actos de jurisdicción voluntaria procedentes de operaciones mercantiles.

2.º Diversos criterios sustentados sobre este punto.

Debatida tan prolija y continuadamente esta cuestión, no es extraño que se hayan sostenido diversas teorías y contradictorias opiniones, que procuraremos exponer sucintamente, aunque sin omitir, como muestra de imparcialidad, los fundamentos principales que se aducen y las razones primordiales que se alegan en favor de cada una de esas teorías.

§ I. Competencia de la jurisdicción civil ordinaria.

La primera opinión que vamos á analizar es la que arguye en favor del estado actual de nuestra legislación, rechazando los Tribunales especiales, para reservar el conocimiento de los asuntos mercantiles á los mismos jueces ordinarios, encargados de administrar justicia en lo civil.

Debemos confesar que esta teoría no encuentra muchos partidarios, si es que tiene alguno, en las clases mercantiles, y hemos de acudir á los juristas para conocer sus fundamentos, que expuso con gran lucidez, en el Congreso jurídico español de 1886, el ilustrado catedrático de la Universidad

central D. Luís Silvela; advirtiendo que, si el distinguido letrado D. José Cristóbal Sorní pudo decir en un Congreso comercial que la supresión de esos tribunales se hizo sin que se oyese "ni una queja, ni una lamentación de ningún comerciante", de entonces á acá esas quejas y esas lamentaciones son tan frecuentes y continuadas, que bien podemos afirmar que los comerciantes no desaprovechan hoy ocasión alguna de pedir el restablecimiento de su jurisdicción privativa.

No se crea por esto que los jurisconsultos son unánimemente contrarios á esa aspiración del Comercio. A la iniciativa de un letrado, D. Manuel Durán y Bas, se debe la ley de 7 de Mayo de 1880, que abrió amplia consulta sobre este tema; y á los esfuerzos de dignísimos abogados se deben estudios profundos en esa materia y trabajos meditados en Ateneos, reuniones, Asambleas y Congresos jurídicos.

Alégase, como una de las principales razones para oponerse al restablecimiento de los Tribunales de Comercio, que es tarea imposible la de distinguir entre los actos mercantiles y los civiles, tendiendo el progreso jurídico á fundir ambos derechos en uno solo.

Reconocemos ingenuamente que el vigente Código no distingue con la debida precisión los actos de comercio, y sin detenernos ahora, por no ser la ocasión oportuna, en señalar las deficiencias legales, indicaremos que pueden suplirse fácilmente, dividiendo el Código en dos partes: una para dictar las reglas que deben observar los que se dediquen al comercio, y otra en que se definan los actos mercantiles, señalándolos taxativamente y disponiendo que los preceptos que se dicten sean obligatorios, lo mismo para los comerciantes que para los que, sin ejercer esa profesión, intervengan en cualquiera de aquellos actos.

Deslindados así los campos, desaparece toda duda, y aun el peligro, que también se aduce como argumento contra los Tribunales de Comercio, de que se susciten á menudo cuestiones de competencia que di'aten la terminación del juicio; porque, señalados con precisión los límites de ambas jurisdicciones, no deben promoverse competencias, á menos de proceder con marcada temeridad.

Otra de las razones que se formulan es la de que los jueces ordinarios no se consideran imperitos para conocer de negocios de comercio, cuando las Audiencias han votado unánimes en 1880 contra la jurisdicción especial, añadiendo que, si en la práctica se les ofrecen algunas dudas, por desconocer los usos mercantiles, esas mismas ocurrirán cuando se trate de negocios de minas ó de obras públicas; y aun los mismos jueces comerciantes desconocerán las costumbres de aquellos ramos de la industria y del comercio á que ellos no se dediquen.

Mal se hace en argüir con las opiniones de las Audiencias, por respetables que sean. Ya hemos dicho que las cuestiones de jurisdicción, como todas las que afectan á la autoridad, se defienden con empeño, porque siempre propendemos á ensanchar la órbita de nuestro dominio, y vemos con disgusto que se cercenen nuestras facultades. Por eso las Audiencias votan unánimes contra la institución del Jurado, que da intervención á un elemento extraño en los asuntos criminales; por eso se oponen al restablecimiento de

Tribunales especiales, y por eso serán constante rémora para cualquier progreso jurídico que signifique una limitación de su autoridad.

Y no son ellas solas las que defienden su jurisdicción. Los militares, los marinos, los eclesiásticos, todas las clases sociales organizadas claman por sus fueros personales y privativos; y ¿por qué no hemos de decirlo? los comerciantes mismos, aparte de las razones que aduzcan para reclamar una jurisdicción especial, proceden por cierto orgullo, ambición, espíritu de clase, ó como quiera llamársele, al insistir en que se les conceda fuero propio, emancipándose de los jueces ordinarios para someterse á otros designados de entre ellos mismos.

En cuanto á la imposibilidad de que un juez, civil ó comerciante, conozca todos los detalles de la industria, del arte, del comercio y de los innumerables ramos de la actividad humana, nadie lo duda; pero tampoco se negará que el comercio tiene ramificaciones más extensas y campo más dilatado que las demás profesiones; y sus prácticas especiales, su organización peculiar y su tecnicismo propio, obedecen á reglas que no todos estudian, y que son comunes á cualquier género de comercio. Busquemos, al menos, el conocimiento de esos principios generales, y si todavía se ofrecen dudas, por ventilar cuestiones relacionadas con una industria especial, acúdase á esos peritos que se reclaman como consejeros de los jueces, y que también pueden asesorar, caso necesario, á los que formen el Tribunal de Comercio.

Intencionadamente pasaremos por alto el cargo que se dirige á esos Tribunales especiales por la notoria injusticia de algunos de sus fallos. También oímos á diario que el Jurado, en lo criminal, dicta veredictos injustos, por lo cual se pide que desaparezca esa institución, considerada por muchos como una conquista de los tiempos modernos. No hemos de defenderlos de esa acusación; ni aun siquiera recordaremos que los Tribunales militares, los de Marina y los eclesiásticos, suelen también equivocarse, pues la infalibilidad sólo se reconoce en el Sumo Pontífice; pero ¿es quizá que los jueces ordinarios fallan siempre en justicia? Véase la colección de sentencias del Tribunal Supremo, casando y anulando con frecuencia los fallos de sus inferiores, que se declaran injustos, y aun todavía hay quien discute el acierto de algunas de esas últimas sentencias, por más que sean inapelables ante la ley. Recuérdese el adagio que nos aconseja no tirar piedras á nuestro vecino si tenemos el tejado de vidrio, y dejemos á un lado ese cargo, que es, desgraciadamente, común á todo lo humano.

Por último, se habla de la dificultad de organizar esos Tribunales por falta de comerciantes matriculados, á no ser en limitadas plazas, que no llegarían á una docena. Mucho se exagera, ó poco se conoce la extensión del comercio en España, porque, seguramente, serán muchas más las poblaciones en que puedan crearse los referidos Tribunales; y obsérvese que no se trata de organizarlos en todos los pueblos, incluso en la más pequeña aldea, que basta con que se formen en las capitales de provincia y alguna otra plaza mercantil importante; y que hoy mismo se estudia el medio de reducir nuestros Tribunales civiles á muy contadas poblaciones, en las que también pueden subsistir los Tribunales de Comercio, si llegan á restablecerse.

§ II. Restablecimiento de los Tribunales de Comercio.

Con ser este criterio el que más partidarios tiene, al menos entre las clases mercantiles, no sabemos que nadie, á no ser la Cámara de Comercio de Cádiz en 1887, pida el verdadero *restablecimiento* de esos Tribunales en la misma forma que tenían cuando fueron suprimidos. La generalidad desea la creación de Tribunales especiales para el comercio, pero organizados bajo distintas bases, que se separan más ó menos radicalmente de las antiguas, según las opiniones particulares de los sostenedores de esa tesis, que ni aun pretenden sostener la esencia de la histórica institución.

En efecto; ya sabemos que los antiguos Tribunales de Comercio estaban formados de un prior y dos cónsules, todos comerciantes, que decidían las cuestiones judiciales sobre operaciones mercantiles, resolviendo el hecho y el derecho, pues si bien tenían un letrado consultor, su dictamen no era obligatorio para los jueces. Exigía la ley ciertos requisitos para poder desempeñar esos cargos, y ordenaba que fuesen de nombramiento real, eligiéndolos de las listas que los Intendentes de las provincias debían formar anualmente.

Esa organización extraña, esas denominaciones anticuadas y esa forma de nombramiento de los jueces, no pueden ya restablecerse; pero no es eso lo esencial, sino que la jurisdicción tan amplia é ilimitada que se concede á tres comerciantes para decidir cuestiones mercantiles, pero jurídicas, no es prudente ni debe concederse en nuestro actual estado social.

Tribunales así organizados parecerían consecuencia de un fuero personal, y eso no podemos admitirlo. Desde la Constitución de 1812, que ordenó rigiese un mismo fuero para toda clase de personas, se ha pugnado por llevar á la práctica ese principio, estimando que la diversidad de fueros embaraza la administración de justicia, dificulta la resolución de los negocios por la multiplicidad de las cuestiones de competencia, que originan empeñados conflictos entre las distintas jurisdicciones, y erige en sistema exenciones y privilegios que la ciencia rechaza.

Los fueros personales cayeron de un solo golpe por el decreto revolucionario de 1868, y no podemos volver á lo antiguo, ni insinuar siquiera que se procura tener una jurisdicción propia y privativa. Si los comerciantes desean conseguir jueces especiales para los negocios mercantiles, es preciso que huyan de todo argumento que ponga de relieve su aspiración á juzgarse por sí mismos con fuero personal y como clase independiente, pues en ese terreno los esfuerzos han de ser inútiles, estrellándose ante las corrientes igualadoras de la época.

Precisamente el error en que incurrió el decreto de 6 de Diciembre de 1868 fué el de estimar fuero personal el de comercio; y si hoy podemos combatir aquella ley, tan acertada en otros órdenes, es basándonos en que no se trata de restituir fueros privativos para comerciantes, sino de crear Tribunales especiales que entiendan en asuntos distintos de los comunes y que se rigen también por diversa legislación.

Bajo este punto de vista, y por excesivas que sean las pretensiones

de algunos, no niegan los comerciantes ilustrados que la generalidad carece de los conocimientos necesarios para resolver complicadas cuestiones de derecho.

Si hemos de ser sinceros, no podemos ocultar la especie de prevención que existe entre los comerciantes contra los letrados, y que éstos pagan cumplidamente. El comerciante, por lo general, opina que no hay abogado que conozca los asuntos mercantiles ni sepa decidir las cuestiones que sobre ellos surjan; y el letrado, por su parte, salvo raras excepciones, enorgullecido con su ciencia, cree que el comerciante no es apto más que para hacer números ó desarrollar sus negocios, y que su inteligencia no alcanza á interpretar una ley ni á resolver una cuestión dudosa. Desapasionados por uno y otro bando, hemos de decir con ruda franqueza que ambos tienen razón en parte, y los dos están igualmente equivocados en el resto.

Es cierto que el comerciante, atento á sus complicados negocios y difíciles operaciones, no se encuentra en las circunstancias más favorables para el estudio del derecho y el manejo de las leyes; mucho más cuando no todos han recibido una instrucción adecuada, y apenas conocen el Código de Comercio, que no debieran olvidar un momento. Por el contrario, como la profesión del abogado no tiene punto alguno de contacto con el ejercicio del comercio, que requiere práctica, conocimientos y aptitudes especiales, muchas veces acontece que el letrado ó el juez no entienden ni aun el tecnicismo del comercio, y se ven confusos y perplejos ante una letra de cambio ó un libro mayor, que por primera vez quizá cogen en sus manos.

Esa es la verdad, por molesta que sea para unos y otros; y si los negocios judiciales mercantiles abarcan, como todos los litigios, cuestiones de hecho y de derecho, así como se rechaza al letrado por desconocedor de las prácticas comerciales, así también debe reconocerse que un tribunal compuesto exclusivamente de comerciantes rara vez podrá resolver con acierto cuestiones de derecho.

Uno de los fundamentos principales que también se alegan en favor del restablecimiento de los Tribunales de comercio es la necesidad de atender á la brevedad y economía en los negocios mercantiles. Es muy cierto que el comercio requiere una actividad extraordinaria y una precisión absoluta, y que repugnan esos asuntos los trámites dispendiosos y prolongados de las actuaciones civiles; pero aunque en menor grado, también se quejan los que no son comerciantes de los desproporcionados gastos é interminables dilaciones de las contiendas judiciales; y lo peor del caso es que esos vicios no se corrigen con tribunales de uno ú otro orden, sino con leyes de procedimientos radicalmente opuestas á las que hoy rigen.

¿De qué serviría constituir un Tribunal formado de comerciantes, si tenía que observar las actuales leyes de enjuiciamiento? De nada, pues seguramente los litigios serían tan costosos y pesados como hoy. Y si se corrige el defecto, como urge corregirlo, reformando esas leyes, ¿para qué necesitamos tribunales especiales, si los que ahora están organizados podrían seguir con celeridad y economía los juicios?

Esas ventajas, que con sobrada razón se reclaman, no dependen de la organización de los tribunales, sino de las leyes adjetivas, y por eso recha-

zamos el argumento, que carece de valor, para insistir en otra ocasión en esa mejora, que estimamos la más transcendental é importante, no sólo para el comercio, sino para todo el que se vea obligado á litigar.

§ III. Jurados Mercantiles.

No puede negarse que la opinión general se ha decidido resueltamente, hace ya algún tiempo, por los jurados mercantiles, compuestos, á semejanza de los que entienden en las causas criminales, de varios jueces comerciantes que resuelvan las cuestiones de hechos, y otros, letrados, que decidan los puntos de derecho.

Esa solución es la propuesta por el Congreso Nacional Mercantil de 1886, las Asambleas generales de las Cámaras de Comercio en todas sus reuniones desde 1889 hasta la fecha, el Congreso Nacional de Profesores y Peritos Mercantiles en 1891, el Congreso jurídico español en 1886, y, por último, la inmensa mayoría de los que se ocupan en estas cuestiones.

Siendo ese medio el más científico, armonizando encontradas aspiraciones, y facilitando la resolución de las cuestiones judiciales con las mayores garantías de acierto, no es extraño que sea acogida con fruición por respetabilísimas autoridades, y no dudaríamos en darle también nuestro humilde voto si no tuviéramos opiniones particulares sobre el Jurado, que debemos exponer sinceramente.

La base del Jurado estriba en la distinción del hecho y del derecho, llevada hasta el extremo de seguir dos verdaderos juicios, con sentencias distintas y con jueces diversos. Así vemos en lo criminal que, concluido el sumario, comienza el juicio de hecho con la práctica de las pruebas y los informes concretos de la acusación y la defensa, para terminar con el veredicto que pronuncian los jurados; y después empieza un segundo juicio con nuevos informes, y otra sentencia para resolver la cuestión de derecho.

Ante los principios jurídicos y las enseñanzas de la ciencia, ese sistema es perfecto; pero voivemos á tropezar con la práctica, y en ella aprendemos que esa distinción teórica entre el hecho y el derecho no es siempre exacta, y que no es fácil deslindar los campos, como se desea, para que ni los jurados ni los jueces traspasen los límites de la jurisdicción que á cada uno de ellos se ha concedido.

Las exigencias del tema nos impiden detenernos en la demostración de ese aserto; pero cualquiera que haya intervenido en asuntos criminales habrá notado que las preguntas que se formulan á los jurados envuelven á veces cuestiones jurídicas, empezando por la primera, donde ha de resolverse la cuestión de culpabilidad; y eso demuestra que es imposible deslindar el hecho del derecho, como se pretende teóricamente.

Esas mismas dificultades, y aun mayores que en las causas criminales, se presentarán en el Jurado mercantil, á menos que se fijen reglas tan restrictivas que reserven á los comerciantes un papel, más que secundario, depresivo.

En la mayoría de los casos, las cuestiones de hecho no existen, ó se resuelven fácilmente, y no merece la pena de molestar á comerciantes de

larga práctica para que resuelvan si una letra está ó no aceptada, y si se celebró ó no un contrato que, ordinariamente, se habrá consignado por escrito.

Eso lo resuelve cualquiera, sin más que saber leer, y no es esa la misión que debe encomendarse á los Jurados mercantiles, que deseamos entiendan en la resolución de complicadas cuestiones, donde sea preciso tener en cuenta la práctica y aplicar las leyes interpretándolas con arreglo al verdadero espíritu del comercio; y eso no podrán hacerlo si son jueces de hecho, á quienes está vedado pronunciar palabra que con el Derecho se relacione.

Debemos, pues, huir de una copia fiel de nuestro Jurado para lo criminal, y buscando moldes nuevos, para no encerrarnos en esos tan estrechos, que parecen ser los únicos en que podemos escoger, tracemos las líneas generales de una organización adecuada para los fines que se persiguen.

§ IV. Sistema mixto.

Varias son las combinaciones ideadas para esos Tribunales mixtos por los que han tratado este punto; pero todas convienen en designar jueces letrados y comerciantes en número variable, para que, reunidos y en una sola sentencia, resuelvan en toda su integridad las cuestiones jurídico-mercantiles, sin distinciones de hecho y de derecho; y en ese sentido se redactó la ponencia de D. Bernabé Dávila y D. Juan M.^a López en el Congreso jurídico, apesar de que la conclusión aprobada fué la de establecer un Jurado, reservando á los Tribunales ordinarios las cuestiones de derecho.

Falta tiempo y espacio para detenidos razonamientos; pero no podemos excusarnos de exponer, siquiera sea someramente, los fundamentos de nuestro criterio.

Las razones consignadas en el preámbulo del decreto de unificación de fueros para justificar la supresión del de Comercio, no nos satisfacen. Si las leyes entonces vigentes tenían deficiencias, ó eran ilógicas, esos son defectos que deben corregirse sin necesidad de suprimir la jurisdicción mercantil. Es verdad que carecía de explicación plausible que los Tribunales de Comercio existieran sólo en algunas plazas, mientras que en otras entendían los jueces ordinarios de los negocios mercantiles, que también conocían de la segunda y tercera instancia y del recurso de injusticia notoria; pero esas antinomias se corrigen reformando la ley bajo un plan fijo, y no justifican la desaparición de los Tribunales de Comercio.

En orden al otro motivo que se alega en el mismo preámbulo, lo consideramos equivocado, porque no es cierto que "la naturaleza é índole de los asuntos mercantiles" no reclame "fuero privativo, ni, en general, enjuiciamiento propio." Sin detenernos en otras consideraciones, baste recordar que hay un Código especial para el Comercio, lo cual obedece al convencimiento de que la naturaleza é índole de los asuntos mercantiles difieren esencialmente de las que caracterizan á los demás negocios comunes; y como ese Código requiere una apropiada ley de Enjuiciamiento, también exige Tribunales especiales que lo apliquen.

Esos Tribunales deben formarse de personas peritas en las materias

que han de juzgar, y aunque parezca ser una solución al problema la propuesta por D. Bienvenido Oliver, por la enmienda que presentó en el Congreso jurídico, aconsejando que se estimulase la formación de jueces y magistrados especialistas en esta parte de la ciencia del Derecho, no creemos factible lo propuesto.

Confesamos que, ante el inmenso desarrollo y prodigioso adelanto en todos los ramos de la ciencia, se impone la necesidad de dividir y subdividir el trabajo, en la imposibilidad de que un solo hombre, por esclarecida que sea su inteligencia y extraordinario su afán de estudio, abarque una de esas ramas del saber en sus múltiples desarrollos. De aquí que en la generalidad de las profesiones se creen especialistas, que en lo civil, criminal y mercantil, serían muy convenientes; pero cuando los pleitos disminuyen, por causas muy complejas, en proporciones alarmantes para los que en ellos cifran su manera de vivir, no hay medios de sostener con decoro esos letrados especialistas en la generalidad de las poblaciones.

Concretándonos á la situación actual, diremos que es imposible que un juez, obligado por su cargo á intervenir en complicados litigios civiles, y apremiado por las continuas exigencias de la Administración de Justicia en lo criminal, pueda al mismo tiempo estudiar y resolver cuestiones del orden administrativo y mercantil, pretendiendo convertirlo en una enciclopedia vi-viente, cuando carece de tiempo material para atender á sus más sencillos deberes.

La interpretación de las leyes mercantiles no exige mayor esfuerzo mental que el estudio de cualquier otro Código, pero requiere conocimientos especiales sobre la práctica del Comercio y sobre los usos mercantiles, y aquel que no haya manejado los libros de contabilidad no podrá examinarlos, en caso de litigio, para apreciar debidamente la prueba que se practique y decidir en justicia la buena ó mala fé de una operación de Comercio; y sin conocer los más prolijos detalles de la práctica mercantil, imposible será interpretar con acierto el espíritu y la letra del Código, por mucho que se estudie y por extraordinaria que sea la inteligencia dedicada á esa labor.

Dedúcese de lo expuesto que los negocios mercantiles, que constituyen una especialidad distinta de los comunes y se rigen por leyes propias, exigen conocimientos y aptitudes también especiales, hasta el punto de reglamentar el ejercicio de la profesión con obligaciones peculiares que á ninguna otra se imponen; y esos negocios no deben resolverse por personas imperitas en la materia de que se trata, como lo son los jueces ordinarios, teniendo que formar los Tribunales de otras personas que reúnan los conocimientos teóricos y prácticos que se requieren, á menos de renunciar al deseo de que se administre bien y cumplidamente la justicia.

Tan difícil es encontrar en número suficiente, y en todas las poblaciones, quienes reúnan los conocimientos necesarios para la resolución de estas cuestiones, que, con objeto de no dar la preferencia ni á los letrados ni á los comerciantes, ni constituir tampoco Jurados, deslindando el hecho del derecho, cuando no pueden separarse en la generalidad de los casos, no encontramos otro medio mejor de solucionar el conflicto que el de formar un Tribunal mixto, compuesto de peritos en la ciencia del derecho y en el ejercicio

del comercio, para que, auxiliándose mutuamente y formando un solo cuerpo, resuelvan las cuestiones que se susciten.

No hemos de ocultar las dificultades con que tropezará esa solución, señalando entre ellas el dictamen contrario de la mayoría, que propone otros medios; pero así como el incansable é ilustrado Decano del Colegio Pericial Mercantil de Málaga, D. Pedro Gómez Chaix, en sus notabilísimos apuntes acerca de los Tribunales de Comercio, apesar de ser decidido partidario del Jurado, concluye por aceptar en beneficio de los intereses del Comercio y de la Justicia, y hasta recomienda particularmente que se le indique cualquier otra forma análoga, como los tribunales mixtos, también creemos que, inspirándose todos en el mismo amplio criterio, sin exclusivismos de escuela ni temerarias presunciones, aceptarán esta forma si se reconoce su eficacia, como nosotros aceptaríamos cualquier otra que la opinión general exigiera y que parezca más adecuada para conseguir los fines que todos perseguimos.

Concretando nuestro pensamiento, formularemos las siguientes bases:

1.^a Se constituirán Tribunales de Comercio en todas las capitales de provincia y poblaciones que lo exijan por su movimiento mercantil.

2.^a Esos Tribunales ejercerán jurisdicción en el territorio que se les señale.

3.^a Tendrán competencia para conocer de los litigios y actos de jurisdicción voluntaria que se promuevan sobre asuntos de comercio, sean ó no comerciantes los que litiguen.

4.^a Ejercerá el cargo de Presidente un funcionario de la carrera judicial, procurando elegir á los que hayan mostrado más afición ó aptitudes en el estudio de la legislación mercantil.

5.^a Las Cámaras de Comercio formarán anualmente listas de los comerciantes más caracterizados y que reúnan las condiciones que se fijen.

6.^a El Presidente del Tribunal, el de la Cámara de Comercio y el Decano del Colegio de Abogados, elegirán de esa lista doce comerciantes, designando además ocho abogados en ejercicio, para que actúen como jueces en cada trimestre.

7.^a Al presentarse una demanda se hará el sorteo de los que deban ejercer entonces, eligiendo cuatro comerciantes y dos letrados que formen parte del Tribunal.

8.^a Los litigantes pueden recusar libremente á los que resulten elegidos, hasta que quede el número suficiente.

9.^a También designarán cada uno de los litigantes la persona que merezca su confianza para que forme parte del Tribunal, sin exigirle requisito alguno, siempre que sea mayor de edad.

10.^a El Presidente, con un Secretario, dictará las providencias de mera tramitación en el juicio, y el Tribunal en pleno conocerá de todos los incidentes, diligencias de prueba y sentencia definitiva.

11.^a Se publicará sin dilación alguna la ley de Enjuiciamiento mercantil, procurando la brevedad de los términos y la simplificación de los trámites.

12.^a Estos juicios se seguirán en papel común y sin exacción de derecho; pero el litigante vencido deberá pagar una multa proporcionada á la cuantía del litigio.

13.^a La mitad de esas multas se abonará en papel de pagos al Estado, y la otra mitad servirá para distribuirla como dietas á los jueces del Tribunal.

14.^a Contra la sentencia que se dicte no se dará otro recurso que el de casación, por las causas que taxativamente se fijen.

Hemos concluido nuestro trabajo. Las materias que comprende el tema son tan interesantes y transcendentales, y el tiempo y espacio de que podemos disponer son tan limitados, que desconfiamos de nuestra propia obra, y tememos no haber sabido explicar nuestro pensamiento con la debida claridad y precisión para que pudiera utilizarse algo beneficioso para los intereses que se ventilan.

Quisiéramos que nuestra labor fuese fructífera; pero si no lo conseguimos, por insuficiencia propia, conste al menos que nuestro deseo ha sido el de contribuir al nobilísimo propósito que ha guiado á los que acordaron este Certamen, procurando allanar el camino de la justicia, que es la suprema aspiración del hombre, y defendiendo los intereses particulares del Comercio, tan extendidos en la época presente y tan merecedores de protección y auxilio.

30 Junio 1900.



